

# EL DERECHO AL AGUA EN COLOMBIA. ASPECTOS PARA SU CONSOLIDACIÓN

ÓSCAR IVÁN GÓMEZ ROBAYO



UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE POSGRADOS  
ÁREA DERECHO

2018

# EL DERECHO AL AGUA EN COLOMBIA. ASPECTOS PARA SU CONSOLIDACIÓN

ÓSCAR IVÁN GÓMEZ ROBAYO

Trabajo de Grado para optar por el título de Máster en Derecho Administrativo



Asesora Metodológica:

Dr. Nohora Elena Pardo

UNIVERSIDAD LIBRE  
FACULTAD DE POSGRADOS  
ÁREA DERECHO

2018

## TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	5
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	9
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....	9
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .....	11
1.3. HIPÓTESIS .....	12
1.4. OBJETIVOS .....	12
1.4.1. Objetivo General.....	12
1.4.2. Objetivos específicos.....	12
1.5. JUSTIFICACIÓN .....	13
2. METODOLOGÍA.....	17
3. EL DERECHO AL AGUA EN EL ÁMBITO JURÍDICO INTERNACIONAL .....	19
3.1 DERECHO AL AGUA: MATERIALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA.....	33
3.2. EL DERECHO AL AGUA EN EL ÁMBITO JURÍDICO DE COLOMBIA.....	39
4. EL DERECHO AL AGUA Y SU COMERCIALIZACIÓN, ANÁLISIS CUANTITATIVO .....	52
5. EL DERECHO AL AGUA: ENTRE MITOS, VERDADES, DEMAGOGIA Y REALIDADES GEOPOLÍTICAS.....	57
6. PROPUESTA PARA QUE EL DERECHO AL AGUA EN COLOMBIA SE MATERIALICE CADA VEZ MÁS .....	73
CONCLUSIONES.....	76
BIBLIOGRAFÍA.....	78

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. consumo de agua embotellada por regiones de 1997 a 2004 .....	54
--	----

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado profundiza en un aspecto trascendente para la calidad de vida de los ciudadanos del mundo y por supuesto, de Colombia porque está en la raíz misma de la naturaleza existencial como lo es el agua, que se asume dentro del ordenamiento jurídico. En consecuencia, se ha analizado desde la óptica de los derechos humanos universales consagrados, a su vez, en los cimientos constitucionales del país, consolidados con el bloque de constitucionalidad y reglamentados en las leyes y decretos respectivos.

En vigilancia académica de las dificultades que afronta el medio ambiente y a la escasez hídrica que vive la tierra con secuelas negativas en la calidad de vida de amplias regiones de la humanidad, entre ellas varias de Colombia, se ahonda en los argumentos doctrinales y jurisprudenciales del acceso al agua potable con base en las normas del Derecho Internacional Público y en la normatividad constitucional y legal colombiana, con el propósito de establecer los asientos jurídicos que hacen del acceso al agua potable un derecho fundamental.

En específico, se examinan los acuerdos internacionales más relevantes concernientes a derechos humanos y recursos hídricos, así como los documentos relativos al agua potable en la jurisprudencia internacional, en especial, los

expedidos por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otros. Por medio de este trabajo de posgrado se ha pretendido clarificar la situación del derecho al agua en el marco del Derecho internacional y de la legislación nacional, pues ya se ha promulgado amplia reglamentación que por una parte, resguarda la demanda básica de agua potable y, por otra, reconoce el acceso al preciado líquido como un derecho humano de carácter fundamental.

En el desarrollo de esta profundización se diserta sobre los fundamentos doctrinales que han llevado a las instancias internacionales y a las colombianas a incluir el acceso al agua potable como un derecho humano de carácter fundamental con una exhaustiva revisión de los elementos socio jurídicos que han motivado tales decisiones, que han repercutido de manera decisiva en el mejoramiento del hábitat de miles de personas alrededor del mundo y en Colombia, pero que aún es insuficiente en su legislación y materialización y requiere de ajustes conceptuales, jurisprudenciales, políticos y administrativos que son objeto también de revisión en estas páginas.

También se aborda la historia mundial del derecho al agua y los escalones que tuvo que ascender para llegar a instalarse dentro del marco internacional de los derechos

humanos. En el mismo contexto se hace un análisis histórico de la presencia del acceso al agua como derecho en la legislación colombiana para identificar con precisión el estado actual del mismo en el ordenamiento jurídico nacional.

En cumplimiento de los objetivos propuestos, el documento estudia la problemática del acceso al agua potable en Colombia para precisar el nivel importancia que tiene en la cotidianidad de millones de ciudadanos y el impacto de su escasez en zonas específicas del país, para contextualizar el por qué de su inclusión como un derecho, con todas las implicaciones legales y sociales que ello conlleva.

Al adentrarse en el tema de derechos fundamentales se auscultó con precisión el origen constitucional de los derechos humanos y se explica con exactitud jurídica qué se entiende por el bloque de constitucionalidad para poder ubicar el acceso al agua potable dentro del marco internacional de los derechos humanos y los convenios que Colombia ha firmado al respecto tanto de manera vinculante como no vinculante.

De manera consecuente se introduce el análisis del mercado de agua y su comercialización como tendencia macroeconómica en varios países del primer mundo y cómo a ésta se contrapone el derecho consagrado del acceso a ella como parte de los fundamentos esenciales e inalienables del ser humano universal, con

los avances, retrocesos y retos que este debate tiene el mundo y, de forma especial, en Colombia. La esencia de esta tesis radica aquí: en develar cómo el comercio del agua es el obstáculo más grande que debe afrontar el derecho al agua y por qué, y cómo debería contrarrestarse para que el disfrute pleno de éste por parte de la población colombiana sea una realidad.

En cadena conceptual con el escenario de mercado versus derecho fundamental, se aborda la estructura jurídica y administrativa de la prestación del servicio de agua potable en Colombia para verificar si se concreta en dichos procesos el postulado de derecho esencial e identifica en donde hay vacíos legislativos y/o de aplicación constitucional.

Con base en el análisis anterior se ha hecho una revisión profunda de las implicaciones legales del derecho al agua en el marco de los derechos humanos, para determinar las ventajas de la normatividad existente en el país, así como las falencias que aún subsisten y que afectan la ejecución integral de este derecho por parte de la población colombiana. Finalmente se identificó el grado de materialización del derecho fundamental al agua en los ámbitos judicial, administrativo y social de Colombia para efectuar las conclusiones respectivas fruto de los análisis y la profundización realizada.



## 1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

### 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El nuevo milenio trajo consigo la necesidad inminente de que los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas asumieran el compromiso de ejecutar los objetivos de desarrollo del Milenio (ODM) que florecieron entonces como la armazón para fortalecer las políticas internas en cada país con miras al desarrollo de ocho retos, estimados como el peldaño esencial del desarrollo humano<sup>1</sup>.

El propósito marcado en el punto sexto se refiere, en sentido amplio, al agua limpia y al saneamiento como un compromiso internacional que debe verse reflejado en el accionar legislativo, ejecutivo y judicial de cada Estado con responsabilidad vinculante, como el caso de Colombia. Para el aspecto concreto del líquido vital, el documento se propuso “reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”<sup>2</sup>. No es

---

<sup>1</sup> PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. [En línea]. [25 de agosto de 2017]. Disponible en: <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWs-2016.pdf>

<sup>2</sup> Ibid.p.11.

propósito de este estudio la comprobación de esa meta, pero sí es un referente para el análisis jurídico propuesto.

En algunas ocasiones la Honorable Corte Constitucional se ha pronunciado en la defensa del derecho al agua como un componente de los derechos fundamentales de los ciudadanos<sup>3</sup>, pero no por ello puede deducirse que el país en su conjunto haya adoptado en todas sus esferas, sobre todo en las de corte jurídico y administrativo, el mandato internacional de tipificar el derecho al agua como un derecho humano de naturaleza básica y esencial.

Como aún persiste la carencia de agua potable en algunas regiones de Colombia y en otras el suministro es escaso y deficiente, se halla el país en una problemática compleja dado que los compromisos del Estado para estas épocas fueron los de reducir al máximo el número de ciudadanos aquejados por el abastecimiento del

---

<sup>3</sup> COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia T-475/17: La Corte en varias ocasiones ha reiterado la procedencia de la acción de tutela para la salvaguarda del derecho al agua, entendiendo que cuando se destina al consumo humano se realza su propio carácter de derecho fundamental y su protección puede ser garantizada a través del mecanismo constitucional. Esta posición ha sido sentada en diversas providencias, teniendo en cuenta que el agua es un presupuesto de desarrollo de la vida misma, de la salud y de la dignidad humana de las personas, entendida como la posibilidad de gozar de condiciones materiales de existencia que le permitan al individuo desarrollar un papel activo en la sociedad. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho fundamental al agua se encuentra ligado al principio de dignidad humana, pues éste constituye un elemento para tener unas condiciones materiales de existencia adecuadas (vivir bien). Ha dicho también este Tribunal que el suministro permanente e ininterrumpido de agua es el medio para hacer efectiva esa garantía constitucional. En concordancia con lo anterior la Corporación ha establecido que procede la acción de tutela para conjurar la afectación del derecho al agua potable, en diversos campos de aplicación de gran importancia.

líquido vital. Lo anterior es preámbulo del tema central de esta tesis que es la dificultad de ejercer este derecho frente al interés de comercialización del agua.

Desde la óptica vinculante que dichos documentos representan para el Estado, el problema que subyace y que se pretende sacar a la superficie en esta profundización académica es el de comprobar si hay una materialización efectiva del derecho al agua como derecho humano de primera generación en la Constitución, el Bloque de Constitucionalidad, las leyes y los decretos reglamentarios en Colombia, en una nación que garantiza a su vez, la comercialización de los recursos naturales, entre ellos, el agua.

## 1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los elementos que sustentan en el régimen jurídico colombiano, la garantía del derecho al agua en el marco internacional de los derechos humanos, frente a los intereses de comercialización del agua?

### 1.3.HIPÓTESIS

La hipótesis de la cual se parte es que la Constitución y las leyes respectivas en Colombia, no reflejan toda la esencia jurisprudencial internacional en derechos humanos relativos al agua y por el contrario, permiten la comercialización diversa de ésta en detrimento del ejercicio pleno del derecho tutelado.

### 1.4.OBJETIVOS

#### **1.4.1.Objetivo General.**

Establecer los elementos que sustentan en el régimen jurídico colombiano, la garantía del derecho al agua en el marco internacional de los derechos humanos, frente a los intereses de comercialización del agua.

#### **1.4.2.Objetivos específicos.**

- Distinguir con precisión, qué normas internacionales tienen carácter vinculante para Colombia en materia de derecho al agua.

- Relacionar los acuerdos y documentos internacionales firmados por Colombia, con la Constitución y las leyes respectivas, teniendo en cuenta por supuesto, el Bloque de Constitucionalidad aplicado al caso estudiado.
- Presentar el régimen jurídico internacional y nacional que regula el derecho al agua.
- Analizar los aspectos de orden cuantitativo en la comercialización del agua
- Demostrar que en el derecho al agua en Colombia se afecta por factores de comercialización del agua.

### 1.5.JUSTIFICACIÓN

La tesis que se exhibe en la presente profundización jurídica se origina en la valía que tienen dos principios primordiales para el progreso y desarrollo de cualquier nación como son los derechos humanos en su concepción universal y el derecho al agua como un derecho fundamental, incorporado como tal en el transcurso de las últimas décadas.

El problema de agua potable más complejo que enfrenta el mundo reside en la dificultad de acceso al vital líquido por parte de millones de habitantes<sup>4</sup>, contexto que ha tenido como consecuencia que los países y las regiones lidien por ubicar en las agendas prioritarias de política pública tanto nacional como internacional el tema del agua, desde la perspectiva de derecho humano básico, con el fin de garantizar su protección nacional e internacional<sup>5</sup>.

La jerarquía de esta concepción del agua como derecho esencial para la especie humana, es el resultado del alto grado de trascendencia que el tema tiene no sólo para la calidad de vida de los habitantes de la tierra, sino para la supervivencia de centenares de ellos. Incorporar el acceso al agua como derecho básico es una reafirmación de que forman parte de los derechos principales de hombres, mujeres y niños, indispensable para sus regímenes vitales, los de sus ambientes capitales y los de las comunidades y naciones donde residen.

Para la nación colombiana, que experimenta una profunda metamorfosis con el llamado posconflicto, es de gran utilidad este trabajo académico para las acciones

---

<sup>4</sup> VIDAL, Carmen. El agua es el problema ambiental más grande del mundo. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.ecoclimatico.com/archives/el-agua-es-el-problema-ambiental-mas-grande-del-mundo-517>

<sup>5</sup> SÁNCHEZ, Hugo. El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Bogotá. 2014. 138 p. Trabajo de grado (Presentado para optar al título de magíster en derecho administrativo). Universidad del Rosario, facultad de jurisprudencia.

de rehabilitación rural y urbana que ya se adelantan, pues se inscribe como herramienta para el fortalecimiento de su método ecológico que debe avalar que las entidades prestadoras del servicio de agua potable lo hagan en condiciones de eficiencia, pero sin perder de vista que es derecho fundamental, así como la puesta en marcha de políticas y lineamientos apegados a los mandatos constitucionales y legales. La ampliación de cobertura es, en este contexto, la tarea más urgente del Estado.

Para los beneficiarios del servicio de agua potable es trascendente esta profundización jurídica, ya que el derecho al agua potable, aparte de su condición de derecho fundamental, tiene discrepancias de naturaleza institucional y política que no siempre son protectoras para la comunidad, porque bajo postulados macroeconómicos corporativos se quiere privilegiar el negocio de la generación, distribución y comercialización de agua, por encima de los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos al respecto.

La eminente condición vital que se le fija al agua potable en el contexto internacional y en el ámbito nacional convierte a este documento en un referente metódico y erudito de mucha utilidad en los planos jurídicos y administrativos, porque juntamente con la naturaleza de eficacia y sostenibilidad del servicio público, debe

ir la prestación social adecuada, ininterrumpida y eficiente de un derecho básico garantizado por la constitución y las leyes.

El interés de la política pública por mejorar la cobertura y la calidad del agua para beneficio de los ciudadanos crea, a su vez, una demanda progresiva, tanto en requisitos de ampliación de redes, como de calidad del líquido y de prestación del servicio. Ese apremio constante de la demanda trae como consecuencia que quienes brindan ese servicio se encuentren ante un “mercado” extenso y heterogéneo, compuesto por personas que, en su mayoría, están en situación vulnerable, en términos de protección de derechos fundamentales vistos desde el recurso hídrico, y en ese punto anida la importancia socio jurídica de esta monografía.



## **2. METODOLOGÍA**

La presente profundización jurídica está enmarcada dentro del ámbito metodológico de la investigación correlacional en Derecho que implica el análisis de variables diversas que se deben interconectar como fruto del análisis y las disertaciones propias del tema escogido. En este caso las variables son el acceso al agua como derecho humano, los derechos humanos materializados en la Constitución y las leyes colombianas, y el agua desde la perspectiva del comercio vista como producto de mercado.

El método es totalmente teórico y se basa en el análisis lógico que descompone conceptualmente los objetos investigados, es decir, el derecho al agua y su inclusión en el marco internacional y nacional de los derechos humanos, así como la tendencia macroeconómica a considerarla, en algunos ámbitos geopolíticos, como elemento de compra y venta. Con base en ellos se hallarán los nexos y divergencias entre los conceptos jurídicos para llegar al conocimiento preciso de la materialización del primero en los linderos del segundo, con la presión comercial del tercero.

Las fuentes serán primarias y están representadas en la legislación, en la jurisprudencia internacional y nacional. Las fuentes secundarias son bibliográficas,

video gráficas y documentales varias, relativas directa o indirectamente con el tema tratado.

### 3. EL DERECHO AL AGUA EN EL ÁMBITO JURÍDICO INTERNACIONAL

Los derechos humanos son un compendio integral de garantías que la comunidad internacional ha establecido para que los ciudadanos del mundo puedan gozar de unas condiciones de vida dignas y en armonía con el medio ambiente y con el contexto sociocultural donde habitan. La ONU ha estipulado “que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”<sup>6</sup>.

Para la consecución de sus propósitos, las naciones agrupadas en esa instancia mundial están en el derecho de usar desenvueltamente sus patrimonios naturales, sin menoscabo de los deberes que proceden de la colaboración económica cosmopolita asentada en los postulados del bien mutuo, paradigma de los convenios internacionales.

---

<sup>6</sup> ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Nueva York, 1966.

Con base en el paraje referente a la importancia del agua en el pacto ya referido, se ve cómo la razón de ser estructural de esta alianza es la de resolver esos elementos inciertos para la armonía general regulada, justa y sana. Pero esta noción no ha sido la predominante en la tradición política mundial y local. El agua ha sido un factor tan desequilibrante en la planeación y ejecución de las políticas públicas que muchos hablan de que la guerra del futuro será por el agua, aunque algunos como el analista Jordi Cortés son más optimistas y ven en la cooperación la ruta para zanjar las diferencias entre naciones al respecto:

Más de 2.500 millones de personas dependen de la cooperación entre Estados para asegurarse el acceso a agua potable en cantidad suficiente. Decir que el agua es una causa importante de conflictos es cierto, pero también lo es, que es un factor importante de cooperación entre países. El cuidado y la gestión sostenible de la mayoría de las fuentes de recursos hídricos del planeta es un interés compartido (o al menos debería serlo) por todos los países<sup>7</sup>.

Separadamente de Naciones Unidas, países, empresas, entidades multilaterales y organizaciones no gubernamentales se agruparon desde finales del Siglo XX en un foro llamado Consejo Mundial del Agua para intercambiar opiniones y experiencias sobre el fomento del acceso al agua y el avance en saneamiento rural y urbano<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> CORTÉS, Jordi. El Agua en el Mundo: Cooperación y Conflicto. [En línea]. [12 de agosto de 2017] Disponible en: <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/itinerarios/agua/agua.htm>

<sup>8</sup> WORLD WATER COUNCIL. Dando al agua una voz audible. [En línea]. [17 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.worldwatercouncil.org/es/quienes-somos/vision-mision-estrategia/>

Esta entidad ha tenido resultados agridulces en materia jurídica internacional pues mientras los ministros de los países miembros han declarado al agua como un derecho fundamental de los habitantes de la tierra, la misma declaración por los presidentes de las naciones no fue jamás sellada con sus firmas.

Si bien aquél documento ya no es relevante, desde el reconocimiento por la Asamblea General de la ONU en 2010 del agua como derecho humano<sup>9</sup>, sí lo es el hecho de que no ha sido, no es y no será fácil la lucha geopolítica por la protección de este recurso vital para el ejercicio de la vida en dignidad y equidad pues muchos países tienen agendas comunes con los comerciantes de agua y con las empresas que directa o indirectamente afectan el medio ambiente y el agua en sus procesos productivos, que en el caso de Colombia son fundamentalmente la energía y el agro<sup>10</sup>.

Existen dos grandes enfoques relativos al agua. El enfoque comercial que asevera que el recurso hídrico debe ser posesión de particulares y de este modo transformarse en un producto mercantil. Con base en este postulado, el agua tiene

---

<sup>9</sup> CENTRO DE NOTICIAS ONU. Asamblea General reconoce como derecho humano el acceso al agua. [En línea]. [18 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=18853#.Weo1-WjWzIU>

<sup>10</sup> BAENA, María. Energía y agro, los que más contaminan en Colombia. [En línea]. [19 de octubre de 2017]. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/energia-y-agro-los-mas-contaminan-colombia-articulo-597374>

una valía financiera y debe entregarse a las normas del libre mercado<sup>11</sup>. El alegato de los promotores de esta tesis es que hay en el mundo, sobre todo en el precedido por el enumerado “tercer”, una pésima repartición de las reservas acuáticas, agravada por la dilapidación y la contaminación que son responsabilidad de los países que no se inquietan del agua y también de los beneficiarios, los ciudadanos, que tienden a no valorar ni cuidar lo que en teoría es de todos. El agua, en consecuencia, debe entregársele al sector privado dándole valor comercial.

De otra parte, está el enfoque social donde se asume que el agua se debe conservar en el ámbito de los bienes públicos. Manifiestan sus adeptos que no es pertinente abandonar al comercio capitalista el cometido hídrico, ya que no se trata de un producto mercantil sino de un derecho fundamental y, en consecuencia, su generación, disponibilidad y cobertura deben asentarse en nociones de ecuanimidad, apoyo, valoración comunitaria y cooperación nacional e internacional<sup>12</sup>. El agua, en definitiva, es el recurso vital humano por excelencia y debe protegerse jurídica y socialmente en las esferas mundiales, nacionales y locales.

---

<sup>11</sup> ACHING, César. Capitalismo, imperialismo, globalización y neoliberalismo. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.eumed.net/ce/2010a/cag.htm>

<sup>12</sup> PACHECO, Fredy. Defendamos el agua como “bien social”. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298272/defendamos-el-agua-como-%C3%A2%E2%82%AC%C5%93bien-social%C3%A2%E2%82%AC>

Ahora bien, en uno y otro enfoque, se muestran de acuerdo en que, para lograr producir agua potable con calidad, sostenibilidad y cobertura planificada, es puntual ejecutar labores de infraestructura que son costosas y cuyos recursos financieros deben salir de alguna parte. La perspectiva comercial defiende las propuestas de cesión a la empresa privada porque puede financiarlas, pero con el objetivo de recuperar la inversión. El punto de vista social descansa su teoría en el paradigma de que son los Estados y su contribución mutua quienes deben financiar las políticas hídricas, en consonancia con el ya mencionado Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales inscrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948<sup>13</sup>.

La tarea fundamental se emprendió desde la política pública, cuya actualización más reciente se remonta al año 2015 donde el Ejecutivo toma la decisión de acomodar el objetivo internacional ya mencionado relativo a la producción y sostenibilidad de agua potable, con las realidades económicas, sociales, culturales y jurídicas de la nación colombiana<sup>14</sup>, donde a pesar de la riqueza natural en materia

---

<sup>13</sup> ONU. Declaración universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. [En línea]. [22 de octubre de 2017]. Disponible en: [http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1\\_Universales/B%E1sicos/1\\_Generales\\_DH/1\\_Declaracion\\_Universal\\_DH.pdf](http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_Universales/B%E1sicos/1_Generales_DH/1_Declaracion_Universal_DH.pdf)

<sup>14</sup> PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, op. cit. p. 20.

acuífera, muchas regiones atraviesan escasez del preciado líquido de manera consuetudinaria.

Y es que, para poder enlazar un derecho de categoría fundamental con el paradigma general de los derechos humanos, se requiere de una política pública coherente que garantice estructuralmente el manejo social de los recursos hídricos mediante seguridad jurídica, planeación administrativa y sostenibilidad estatal y gubernamental<sup>15</sup>. En este último aspecto, la estatal depende básicamente de la fortaleza constitucional y legal en materia de derecho al agua, y la gubernamental de la voluntad política de los gobernantes nacionales, regionales y locales en garantizar este derecho y materializarlo en las comunidades.

En síntesis, las fuentes teóricas de las que se nutrirá este trabajo de posgrado oscilan entre la doctrina y la jurisprudencia internacional sobre el derecho al agua y la legislación vigente en Colombia sobre acceso al agua como derecho fundamental, con los soportes y carencias en materialización efectiva como componente de los derechos humanos.

---

<sup>15</sup> QUINTERO, Camilo. Análisis de la política pública de acceso al agua potable. Caso: Río de Oro, Cesar. Bogotá, 2010, 53 p. (Monografía de Grado Presentada como requisito para optar al título de Politólogo). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno.



El agua es la raíz misma de la vida, pero esto no ha sido suficiente en la historia jurídica para que siempre haya sido protegida como derecho fundamental universal. Sólo a partir del siglo XX y con el fortalecimiento de organismos internacionales que han puesto el tema en la agenda de cooperación, se ha conseguido que el acceso al agua sea considerado internacionalmente como un derecho, en el contexto amplio de potabilidad, saneamiento, cobertura y calidad, necesario, además, para el disfrute pleno de otros derechos<sup>16</sup>.

Es evidente que el reconocimiento de derechos humanos a la vida digna, a la integridad, a la salubridad, a la comida, al abrigo, al hábitat adecuado para personas y familias, se sustenta fundamentalmente en el derecho a contextos saludables que parten, pasan o terminan en el agua potable. Sin embargo, millones de personas en el mundo no pueden ejercer este derecho en las cantidades adecuadas, con la calidad requerida para su salud, con la regularidad que la vida digna demanda y con un acceso jurídica y económicamente viable según su condición socioeconómica<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> PAQUIN, Marc. El derecho humano al agua potable y al saneamiento, capítulo 5 del Informe de Naciones Unidas “Agua y Empleo”. Ed: Unesco, Paris. 2016.

<sup>17</sup> DE ALBUQUERQUE, Carolina. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo. Informe presentado como experta independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Acta Comisión de Derechos Humanos 15/31. Naciones Unidas. 2010.

De entrada, hay que reconocer que internacionalmente, en esencia, el problema no es meramente jurídico, sino de aplicación real en contextos de pobreza, sobrepoblación, escasez del recurso, falta de infraestructura, malas gestiones públicas y privadas, desigualdad social extrema y corrupción. No obstante, el objeto de esta profundización es jurídico y se reseña el aspecto social sólo para dejar sentado que entre el derecho y su aplicación real siempre existirá una brecha, mayor o menor, según el caso. Lo relevante es que el tema del agua como derecho básico universal ha seguido en la palestra internacional de escenarios claves para el desarrollo, la justicia social y la equidad.

En ese ámbito se registra cómo el 25 de septiembre del año 2015, los máximos dirigentes mundiales se congregaron en la ONU, sede Nueva York, para sancionar una novedosa Agenda para el Desarrollo Sostenible<sup>18</sup>. Allí, se priorizó el acceso universal al agua y al saneamiento básico como una de las 17 metas a cumplir por los gobiernos en los siguientes 15 años. En lo relativo al propósito concreto del acceso al agua, el documento sitúa como obligación vinculante, que los países asumen la responsabilidad de cooperarse, así como de arrojar las disposiciones legislativas y administrativas requeridas para tutelar el disfrute pleno del agua en

---

<sup>18</sup> NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Nueva York. [En línea]. [3 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015\\_spanish.pdf](http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf)

condiciones óptimas y equitativas de salubridad, infraestructura y costo del servicio cuando diere lugar.

Los derechos humanos son el factor clave en la inclusión del recurso hídrico como parte de las garantías básicas que un Estado democrático debe brindar a los ciudadanos, y en ese contexto lo ha debatido la Organización de Naciones Unidas y también otros organismos multilaterales dependientes y no dependientes del máximo ente de política internacional. Pero ¿qué tanto se ha avanzado en materia de legislación internacional vinculante sobre el derecho al agua? A continuación, se abordará este aspecto con precisión.

La resolución 64-292 del 28 de julio de 2010<sup>19</sup>, por medio de la cual la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al agua y al saneamiento como derecho humano esencial, es el punto de partida jurídico en el orden mundial, donde además se persuade a los “Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en desarrollo”<sup>20</sup>. Es una exhortación

---

<sup>19</sup> NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Resolución 64/292 del 28 de julio de 2010. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S)

<sup>20</sup> Ibid. p.3.

directa y categórica del principal organismo de política pública mundial para que el agua esté en el lugar prioritario que se le otorga a partir de este documento, como derecho básico de los ciudadanos del mundo, es decir, como parte integrante del aparataje jurídico que los protege en sus requerimientos fundamentales como seres humanos.

El 28 de septiembre de 2011, el Consejo de Derechos Humanos promulgó la resolución adicional<sup>21</sup> que transporta el derecho humano al agua potable y al saneamiento básico, a los límites de la obligación estatal. Esta entidad internacional dio así apertura oficial a la vigilancia efectiva sobre los países miembros de Naciones Unidas, para que certifiquen “buenas prácticas sobre el derecho al agua potable y a un saneamiento saludable”<sup>22</sup>, en la que la Relatora Especial deberá poner atención prioritaria, sobre todo en los procedimientos relativos a la materialización constitucional y legal.

Los atrevimientos por presentar al mundo avances sólidos en la enunciación del derecho al agua como garantía internacional, proceden, en su origen, de lo reglado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que marcó el fin de la

---

<sup>21</sup> NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución A/HRC/RES/18/1, 28 de septiembre de 2011. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=S](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=S)

<sup>22</sup> NACIONES UNIDAS. Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida”. Subtema: Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1, párrafo 1. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human\\_right\\_to\\_water.shtml](http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml)

Segunda Guerra Mundial, especialmente en el espíritu del artículo 25, que estampilla las mínimas condiciones adecuadas que se deben garantizar a una persona y a un entorno familiar para tener un hábitat digno integralmente<sup>23</sup> y en donde se puede desentrañar, de forma implícita, el acceso al agua como uno de los elementos fundamentales.

El piso jurídico internacional del derecho al agua lo dejó explícito el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC, a finales de 2002, cuando plasmó oficialmente que deberá entenderse como “el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico<sup>24</sup>” y asume como normatividad oficial orbital el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en particular, el artículo 11 relativo al derecho a un horizonte de vida adecuado, y el artículo 12 referente al derecho de proveerse de óptimas condiciones de salud.

Es claro entonces ante el sistema jurídico internacional, que el derecho al agua se inserta en la clase de protecciones principales para certificar una calidad de vida digna y sana, que se pueda preservar en un ambiente óptimo. Los Estados partes

---

<sup>23</sup> ONU, op. cit, p.4.

<sup>24</sup> ONU, Comité DESC, Observación General No. 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, período de sesiones No. 29, 2002. El derecho al agua (artículos 11 y 12).

ya están obligados a incorporar el derecho al agua en sus legislaciones y paralelamente a garantizar su cobertura a la mayor parte de la población que le sea posible. No es más un asunto de voluntad política, sino de obligatoriedad internacional con repercusión directa en las decisiones y acciones de cada nación.

Es imperativo reseñar en este punto, la existencia de otros instrumentos jurídicos vinculantes de derechos humanos a nivel mundial, donde se ha dejado explícito el deber de las naciones con el suministro de agua por tratarse de un derecho al disfrute de un estándar de vida óptimo para cualquier habitante de la tierra. Para la muestra es pertinente recordar, que en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW, se dispuso que los países firmantes les deben garantizar a todas las ciudadanas el derecho a "gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de abastecimiento de agua"<sup>25</sup>.

De la misma forma, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad registra el derecho de esta población con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales a una categoría vital acorde con indicativos de calidad y cobertura que deben asegurar su ejercicio en contextos de igualdad, equidad y

---

<sup>25</sup> ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW. Nueva York, 1979, con entrada en vigor en 1981. Artículo 14, punto 2, ítem h.

equiparación en lo relativo, concretamente, a la prestación del servicio de agua para consumo humano<sup>26</sup>. Así mismo, con base en el derecho fundamental a la salud, la Convención sobre los derechos del niño, conminó a las naciones a que combatan los padecimientos propios de los infantes y la desnutrición infantil garantizando "el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre"<sup>27</sup>.

Es imperativo revelar, igualmente, que concurren en el escenario jurídico internacional otros mecanismos vinculantes que han decretado el derecho al agua como parte de las obligaciones contractuales de los Estados partes. En ese sentido, corresponde mencionar la resolución No 64/292, prolijada por Naciones Unidas en su asamblea general de julio de 2010, donde se adoptó claramente el derecho humano al agua y al saneamiento<sup>28</sup> y se ratificó que son fundamentales para la práctica de cualquier derecho humano sea o no de primera generación; también incita a las naciones y a los organismos multilaterales de política internacional a suministrar capitales, a patrocinar el aprendizaje y la transmisión de métodos tecnológicos para apoyar a los Estados, sobre todo a los más pobres en desarrollo,

---

<sup>26</sup> ONU. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Art. 28. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

<sup>27</sup> ONU. Convención sobre los derechos del niño. Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Art. 24, ítem C.

<sup>28</sup> ONU, Resolución 64/292, El derecho humano al agua y el saneamiento. Aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S)

y a facilitar una provisión de agua potable, sana, límpida, viable y factible económicamente para todas las personas.

También en el año 2010, el Consejo de Derechos Humanos acogió la resolución A/HRC-15/L.14 donde se registra explícitamente que el acceso al agua potable y al saneamiento básico proceden “del derecho a un nivel de vida adecuado, y que está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana”<sup>29</sup>. En ese mismo contexto, la resolución mencionada expresa que las naciones son garantes del disfrute absoluto de todos y cada uno los derechos humanos por parte de sus respectivos ciudadanos y delegar en personal privado el abastecimiento y la prestación de servicios de agua potable, no dispensa el compromiso estatal en materia de protección efectiva de derechos esenciales.

El aspecto jurídico neurálgico ha quedado explícito desde la expedición de estas resoluciones y radica en la voluntad política de los gobernantes en los respectivos países por sacar adelante las propuestas de actos legislativos y de leyes específicas donde quede estipulado y reglamentado el derecho fundamental al agua como vital para la vida y la calidad de la vida de todas las personas.

---

<sup>29</sup> ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento, Resolución A/HRC/15/L.14, del 24 de septiembre de 2010. párr. 5.



### 3.1 DERECHO AL AGUA: MATERIALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Por pertinencia, el tema del agua en el continente ha sido abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, cuyos delegados oficiales han realizado gestiones en los diferentes países del área tanto con sus gobernantes como con sus legisladores, incluso asistiendo a sesiones ordinarias de los cuerpos colegiados en dichas naciones<sup>30</sup>, con el fin de conminar a estos pueblos a que cumplan con la resolución de la ONU e integren de manera prioritaria en sus legislaciones el derecho al agua con característica de “esencial” para la vida humana.

En las tareas previas, la CIDH ha entrado en contacto directo también con las comunidades nacionales, regionales y locales de las naciones americanas y “ha analizado como el acceso al agua es necesario para satisfacer derechos fundamentales como el derecho a la vida e integridad personal, y que resulta esencial asegurar el acceso al agua sin discriminación”<sup>31</sup>. Es un cambio sustancial en el enfoque internacional de los derechos humanos, caracterizado durante la guerra fría casi exclusivamente por el tema de la violencia institucional e insurgente.

---

<sup>30</sup> COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH. Informe anual 2015. Capítulo VI-A. Acceso al agua en las Américas, una aproximación al derecho humano al agua en el sistema interamericano. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-agua-ES.pdf>

<sup>31</sup> Ibid. p.1.

Las nuevas tendencias que fueron dominando el discurso y la agenda de los organismos internacionales hablan ya de derechos a la libertad sexual, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a la no discriminación y a la participación equitativa y democrática en aspectos civiles, políticos y económicos, dentro de los cuales se incorporó al agua potable, aunque en esencia, forma parte de todos los demás, bien como derecho autónomo, o bien como aspecto necesario para el disfrute de otros derechos básicos.

La Comisión detectó que, en el ámbito internacional, hubo una serie de acercamientos iniciales en el deseo global de jerarquizar el acceso al agua para los habitantes del mundo y en particular del continente americano. Se comprobaron acciones significativas desde 1977 donde se alcanzaron acuerdos en una sucesión de coloquios, paneles y audiencias orbitales, que se han desarrollado desde entonces en diversas latitudes<sup>32</sup>. En estas conferencias de alto nivel interestatal, se reflexionó sobre la necesidad urgente por parte de las naciones, de adoptar acciones jurídicas, administrativas y socioculturales para avalar el acceso al agua

---

<sup>32</sup> Ibid. Pie de página 13: *En el año 1977 en Mar de Plata, Argentina, tuvo lugar la primera conferencia a nivel internacional relativa a la temática del agua, en la cual se consensuó que “toda persona tiene el mismo derecho al agua potable suficiente en cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades”. Más adelante, las grandes conferencias de los años 90 retoman la temática y establecen planes de acción. La Cumbre de Río de 1992 identificó 5 problemas globales a largo plazo: 1) El cambio de clima; 2) la disminución de la biodiversidad; 3) la pérdida de la tierra fértil; 4) la contaminación y la disminución de las reservas en agua dulce, y 5) la deforestación. Una serie de encuentros posteriores en Cumbres temáticas reafirmaron dicha visión (El Cairo, Copenhague, Beijing, Roma). En particular, en dichas cumbres se le atribuye al agua constituir un recurso fundamental para la superación del hambre y de la pobreza; y la falta del agua se considera como uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo humano.*

potable de modo sostenible en consonancia con la protección de otros derechos fundamentales.

En el paradigma fundacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, plasmado en su Carta, se encuentra un propósito coherente con la condición de la mayoría de los países del continente: la erradicación de las condiciones de extrema pobreza como elemento esencial del impulso y afianzamiento de los sistemas democráticos en el hemisferio<sup>33</sup>. De igual manera, la Carta define que los países americanos acuerdan, en aras del progreso general, consagrar sus acciones y decisiones al logro de una sucesión de objetivos prioritarios, como la alimentación saludable y las prácticas de vida sana, fructífera y en condiciones de dignidad humana<sup>34</sup>. El logro de dichos objetivos estriba irreductiblemente en lo que se obtenga en acceso al agua potable por parte de la población, en contextos de paridad seria para el disfrute de los derechos humanos como pilar del desarrollo socioeconómico y cultural.

A partir de 1994, los presidentes americanos se han mancomunado para analizar y decidir sobre los principales problemas del hemisferio, uno de los cuales ha sido el

---

<sup>33</sup> OEA. Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41). Art. 3. Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en:

[http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados\\_multilaterales\\_interamericanos\\_A-41\\_carta\\_OEA.asp](http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp)

<sup>34</sup> Ibid. Art. 34.

acceso al agua. En reuniones programadas para tal fin, se han adoptado medidas que, si bien no representan hechos jurídicos continentales, sí son referentes vinculantes para adoptar medidas en los respectivos países en materia de saneamiento básico. El escenario ha sido la recurrente Cumbre de las Américas, que arrojó en su sesión de Santiago de Chile en 1998, un ambicioso plan de acción donde los líderes continentales pactaron prescindir de todas las formas de segregación social, racial, sexual, de género y de cualquier otro tipo, así como gestionar eficazmente sus naciones con miras al mejoramiento de la calidad de vida de sus respectivos ciudadanos, sobre todo en el aseguramiento del acceso al agua potable<sup>35</sup>.

Esta responsabilidad asumida por las naciones americanas se hizo manifiesta en dos resoluciones expedidas por la Asamblea General de la OEA, que colocan el acuerdo referido al acceso al agua como un derecho de los ciudadanos con categoría de esencial. El primer documento exige a los países del continente estar acordes con los tratados mundiales en materia de agua y saneamiento básico, en especial, en el acatamiento de los deberes asumidos en el tema de derechos humanos y el acceso al agua<sup>36</sup>. Es significativo para el propósito de este trabajo

---

<sup>35</sup> SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. Plan de Acción. Santiago de Chile, Chile, abril 18-19, 1998. [En línea]. [5 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.summit-americas.org/ii\\_summit/ii\\_summit\\_poa\\_sp.pdf](http://www.summit-americas.org/ii_summit/ii_summit_poa_sp.pdf)

<sup>36</sup> OEA. Asamblea General. Resolución 2349 “El agua, la salud, y los derechos humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria. Panamá, 5 de junio de 2007. Trigésimo séptimo período ordinario de sesiones. Documentos y Actas, págs. 357-360.

destacar el enunciado plasmado en este documento donde reza textualmente que “el acceso al agua potable y la higiene básica es indispensable para poder vivir una vida con dignidad humana”<sup>37</sup>. Constituye, sin duda, la plataforma jurídica para la declaración del agua como derecho humano de categoría fundamental.

En el segundo documento macro al amparo de la OEA, que traemos como referencia, los Estados miembros ya reconocen claramente el derecho humano al agua en el sistema interamericano con el condicionante de comprometer a cada nación en el propósito de garantizar cada vez más “el acceso no discriminatorio al agua potable y a servicios de saneamiento como componentes integrales de la realización de todos los derechos humanos”<sup>38</sup>.

Es importante precisar que el derecho al agua no está registrado explícitamente en el sistema interamericano<sup>39</sup>, pero el compendio de sus herramientas vinculantes sí instituye una cadena de derechos que recoge el espíritu doctrinal universal del acceso al agua y sus consecuencias en la vida de los ciudadanos, particularmente en los temas de oferta viable, calidad y disfrute efectivo por parte de la población sin riesgos de arbitrariedad en su asignación. Sin embargo, también es prudente

---

<sup>37</sup> Ibid. p.358.

<sup>38</sup> OEA. Asamblea General. Resolución 2760 “El derecho humano al agua potable y al saneamiento”. Cochabamba, Bolivia, 2012. p.268.

<sup>39</sup> CIDH. op, cit. p. 487.

aclarar que, aunque la jurisprudencia referente al acceso al agua se localiza todavía en fase de construcción en la red geopolítica americana, se pueden hallar igualmente significativas providencias que han ofrecido un albor jurídico continental sobre los deberes de los países en disponer el acceso al agua sin discriminación para todos sus habitantes.

En esencia, la exégesis de los tratados y resoluciones a la luz de los postulados en derechos humanos es lo que permite a los eruditos y jurisconsultos afilar los compromisos que se le asignan a las naciones para cumplir sus cometidos, como en este caso particular, el del acceso al agua potable y al saneamiento básico. Es así como en tiempos recientes los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han “abordado una serie de cuestiones referidas al acceso al agua a través de la interpretación del contenido de una serie de derechos humanos establecidos en los instrumentos interamericanos, para lo cual ha considerado los aportes del sistema universal e información técnica de una serie de organismos especializados”<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Ibid. p. 489.

### 3.2 EL DERECHO AL AGUA EN EL ÁMBITO JURÍDICO DE COLOMBIA

La Constitución Política colombiana de 1991 se define como de carácter predominantemente social donde se concibe al Estado como protector de la población vulnerable. Esta carta magna circunscribe a sus instituciones públicas para que no usen el excedente de sus ingresos en otros fines estatales, hasta que no hayan resuelto la prestación de servicios públicos básicos, con el propósito de forjar una cultura jurídica de los derechos sociales que sea palpable en temas sensibles como el del agua potable.

De igual forma, establece que los miembros de estos sectores de precaria economía deben ser los favorecidos en la planeación nacional, regional y local tendiente al aumento de la cobertura de los servicios públicos y el acceso a éstos como parte de sus derechos sociales, siendo el agua potable y el saneamiento, uno de los más importantes. “En general, el máximo cuerpo normativo colombiano regula el servicio público de agua potable y saneamiento, así como la distribución de los recursos para su prestación, siempre de conformidad con los principios de solidaridad y equidad”<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> BECERRA, José y SALAS, Irma. El derecho humano al acceso al agua potable: aspectos filosóficos y constitucionales de su configuración y garantía en Latinoamérica. En: Revista Prolegómenos - Derechos y Valores – Vol. XIX. No. 37. (Ene-jun.2016) p. 141.

La norma superior colombiana es prolífica en las garantías establecidas a los derechos fundamentales, aunque algunos de gran especificidad técnica como el relativo al contexto del agua potable, no están explícitos. Lo anterior no es óbice para que se pueda inferir sin lugar a equívoco que el Estado de Derecho colombiano reconoce el acceso al agua potable con todas sus implicaciones en la calidad de vida humana, como un derecho básico de la población, con especial protección para esos ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social, cultural, étnica y racial.

Son varias las propuestas que han hecho tránsito en el Congreso de la República tendientes a materializar el derecho al agua que la constitución garantiza. En 2008, por ejemplo, se tramitó el Proyecto de Ley 171 en la Cámara de Representantes<sup>42</sup> que pretendía convocar a un referendo para que el pueblo decidiera y ordenara que el agua potable tuviese, a partir de ese momento, el rango de derecho fundamental. No prosperó, en gran parte, porque muchos congresistas y juristas consideraron que era innecesario hacer un gasto de esa magnitud para definir algo que de manera tácita ya establece la carta política.

---

<sup>42</sup> COLOMBIA. Congreso de la República. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 171 de 2008 Cámara. [En línea]. [1 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=11&p\\_numero=171&p\\_consec=23951](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=171&p_consec=23951)



Sin embargo, la exposición de motivos fue bien valorada por ecologistas, defensores de derechos humanos y congresistas afectos al proyecto, sobre todo por la concepción expresada por los promotores en el sentido de “que se hace necesario e inminente el reconocimiento explícito del derecho humano al agua, con carácter autónomo, de manera que se garantice a todos los habitantes del territorio nacional y se dote, especialmente al sector rural y a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para acceder a este derecho, de mecanismos que permitan su realización”<sup>43</sup>. Es el punto álgido del debate que aún subsiste: qué tan explícito está definido el derecho humano al agua potable en el marco constitucional colombiano. Este proyecto no terminó en Ley de la nación.

Ese mismo año se presentó en el mismo recinto de los representantes regionales otro proyecto de Ley, el 047 de 2008, que buscaba consagrar al agua como un derecho humano. Los opositores arguyeron con tesis muy similares a las del anterior proyecto, pues consideraron que la Constitución sí reconoce al agua como derecho humano, amén de que, al amparo del Bloque de Constitucionalidad, Colombia ya ha firmado los tratados internacionales sobre el agua como derecho de primera generación y automáticamente se ha incorporado a nuestro orden constitucional.

---

<sup>43</sup> Ibid. Ítem 1, párr. 10.

No obstante, hubo insistencia y a los pocos meses se presentó un proyecto de acto legislativo, el 054 de 2008, que pretendía incluir un artículo adicional a la Constitución que postulara la calidad de fundamental del derecho al agua y además que el “Estado tiene la obligación de suministrar agua potable suficiente para todos, sin discriminación alguna por razones territoriales, étnicas, de género o por cualquier otro motivo”<sup>44</sup>.

Lo novedoso de este proyecto de reforma constitucional radica en la inclusión de factores poblaciones muy específicos como destinatarios puntuales de la protección del Estado en materia de saneamiento básico, cobertura de prestación de servicio de acueducto y alcantarillado y suministro prioritario de agua a estos ciudadanos pertenecientes a estas poblaciones. Sin embargo, fracasó por falta de debate y compromiso del grueso de los legisladores y porque hubo de nuevo un grupo de oposición que consideró que esa protección demandada como novedosa para los ciudadanos de grupos llamados vulnerables, ya estaba explícita en el ordenamiento constitucional.

Casi una década después se volvió a presentar en el Senado de la República un nuevo proyecto de acto legislativo, el 11 de 2016, que pretendía concretamente la

---

<sup>44</sup> COLOMBIA. Congreso de la República. Proyecto de acto legislativo 054 de 2008, Cámara. [En línea]. [2 de abril de 2018]. Disponible en: <https://vlex.com.co/vid/proyecto-acto-legislativo-ca-mara-451343106>

inclusión del artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la carta política con la siguiente propuesta de texto:

El acceso al agua es un derecho humano y un recurso natural de uso público esencial para la vida y estratégico para el desarrollo social, ambiental, económico y cultural de Colombia. Su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica. El Estado colombiano debe garantizar el acceso al agua, prevenir el deterioro ambiental y contaminante, velará por la protección, conservación, recuperación y manejo sostenible del recurso hídrico y de los ecosistemas<sup>45</sup>.

La idea central de los ponentes fue vigorizar el amparo del derecho al acceso al agua como recurso natural e instaurarla como derecho esencial, con el argumento de que es un componente capital para la calidad de vida de los ciudadanos tanto presentes como de generaciones posteriores. Se buscaba con esta reforma a la Constitución, que el Estado se obligase a vigilar la conservación adecuada del recurso hídrico, así como su mejora razonable y progresiva en beneficio de los colombianos, sobre todo de los más vulnerables.

---

<sup>45</sup> COLOMBIA. Senado de la República. Proyecto de acto legislativo 11 de 2016 Senado. Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. [En línea]. [10 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=03&p\\_numero=11&p\\_cons ec=44064](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=11&p_cons ec=44064)

Consideraron los gestores de la medida propuesta, que la mejor forma de cumplir con el anterior cometido sobre el agua era “darle categoría de derecho fundamental, equiparándola a una norma no negociable y poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado y los intereses particulares”<sup>46</sup>, con una marcada afectación positiva hacia el valor humano del preciado líquido y dada la representación transcendental que tiene al agua para el progreso armónico y digno de la sociedad en su conjunto, factor excluyente en la preponderancia de la vida humana. Tampoco prosperó en el Congreso.

Un año después, los legisladores tuvieron en su seno deliberante un nuevo proyecto de acto legislativo, el 14 de 2017, para adicionar igualmente el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución, con la siguiente propuesta de texto:

Todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua, en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad. Su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica, para lo cual el Estado garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al principio de progresividad<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Ibid. Ítem 1, párr. 2.

<sup>47</sup> COLOMBIA. Congreso de la República. Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2017. [En línea]. [11 de abril de 2018]. Disponible en: <https://vlex.com.co/vid/proyecto-acto-legislativo-14-676164741>

Este nuevo proyecto limita el contexto a la necesidad humana del agua y al deber de protegerla como derecho de primera generación. Se refiere también al ámbito ecológico y su garantía, pero con una redacción más escueta que la del proyecto anterior. En lo demás, los ponentes encabezados por el Partido Verde, la exposición de motivos y los soportes documentales no variaron en relación con el presentado en 2016. En esta ocasión “el proyecto contó con las firmas y apoyo de 51 congresistas y de esta manera vuelve a arrancar su trámite hacia los 8 debates que se necesitan por tratarse de una reforma constitucional”<sup>48</sup>.

Ahora sólo se espera que termine el curso procedimental de los debates propios de un acto legislativo, para quede consagrado de forma explícita el derecho al agua en la Constitución de Colombia. Es importante resaltar que las honorables Cortes de la nación han proferido sentencias sobre el derecho al agua, lo que implica que, aunque no esté de forma explícita, el agua sí es un derecho de primera generación<sup>49</sup>. Como dato excepcional, se registra que Bogotá expidió una norma en

---

<sup>48</sup> PARTIDO VERDE. “Se vuelve a radicar Proyecto de Acto Legislativo por el Derecho Fundamental al Agua”. [En línea]. [11 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.claudia-lopez.com/se-vuelve-a-radicar-proyecto-de-acto-legislativo-por-el-derecho-fundamental-al-agua/>

<sup>49</sup> COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2007. M.P. Jaime Araújo Rentería. Reconocimiento del derecho al agua en el ordenamiento interno. Sentencia T-725 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Disponibilidad, calidad y accesibilidad. Sentencia T-273 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Derecho al agua potable destinada al consumo como fundamental. Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Naturaleza jurídica del derecho al agua. Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Jurisprudencia constitucional sobre la tutela del goce efectivo del derecho al agua. Sentencia T-764 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Reiteración de jurisprudencia sobre el derecho al agua en establecimientos carcelarios. Sentencia T-707 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Derecho al agua y al saneamiento básico en el ámbito internacional.

2012 que reconoce el derecho al consumo mínimo vital de agua potable en los estratos 1 y 2<sup>50</sup>.

El Estado colombiano, dentro las funciones que la constitución le ha entregado, y concretamente al poder ejecutivo, tiene la misión de vigilar, controlar y sancionar administrativamente a los entes públicos y privados que presten servicios de diversos órdenes, con especial énfasis, en los prestadores de servicios públicos domiciliarios que, como el caso del agua, se constituyen en derechos fundamentales de la población.

Para cumplir con esta premisa se estructuró la Superservicios un “organismo de carácter técnico, creado por la Constitución de 1991, que, por delegación del presidente de la República de Colombia, ejerce inspección, vigilancia y control a las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios”<sup>51</sup>. Esta superintendencia nació con un fin de inspección administrativa, pero con el devenir del régimen constitucional colombiano y las sentencias de las altas Cortes referidas

---

<sup>50</sup> COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 064\_del 15 de febrero de 2012. Por medio del cual se reconoce el derecho al consumo mínimo vital de agua potable en los estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá.

<sup>51</sup> COLOMBIA. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nuestra Entidad. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Nuestra-Entidad>

con antelación, su función, en el caso concreto del agua y del saneamiento básico, ha adquirido el rango de garante de un derecho de primera generación.

Si bien el origen de estos entes de control administrativo en sectores como el bancario, la industria y el comercio se halla en la defensa del consumidor desde la óptica de sus derechos económicos, la homologación de estas entidades en áreas sensibles a los derechos básicos como la salud, el agua y el alcantarillado, les impuso a éstas un aditamento adicional que aquéllas no tienen y es relativo al amparo de derechos humanos de naturaleza esencial.

Por este motivo, la Superservicios ha expedido documentos que buscan aclarar sus responsabilidades en el marco integral de la legislación colombiana, donde afirma, entre otros aspectos, lo siguiente:

El Estado, como director supremo de la economía, interviene por mandato de la ley, entre otros propósitos, con el fin de garantizar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los servicios básicos. (C.P. Art. 334). Dicha intervención, desde un punto de vista instrumental, se realiza a través de las leyes expedidas para el efecto por el Congreso de la República, por los Decretos que expide el Gobierno Nacional y por las normas que expiden las Comisiones de Regulación. Igualmente, un instrumento de intervención es la

vigilancia, inspección y control que se ejerce a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios<sup>52</sup>.

Reconoce este ente de control administrativo, que su función constitucional va mucho más allá de vigilar procesos a empresas prestadoras, para inscribirse en la globalidad del Estado de Derecho que, en esencia, es un garante de los derechos de los ciudadanos, sobre todo cuando se pueden ver vulnerados los fundamentales como el acceso al agua potable. Por ello concluye que “en ese escenario, una sólida regulación en el sector de agua potable y saneamiento básico adquiere un papel cada vez más relevante como medio para fortalecer el liderazgo estatal frente a la garantía de prestación de los citados servicios”<sup>53</sup>.

Liderazgo que más allá de los alcances políticos del ejercicio del poder, se traduce en abanderar desde el ejecutivo una política garantista de derechos fundamentales, que como en el caso del servicio público de agua y alcantarillado, cumpla con los fines constitucionales y las normas internacionales vinculantes en la materia, en beneficio de los ciudadanos que sufren, en muchas ocasiones, la arbitrariedad, la mala calidad, la carencia del servicio sin justificación y el abuso en las tarifas que

---

<sup>52</sup> COLOMBIA. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Concepto unificado 11. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: [https://www.notinet.com.co/administrativo/servicios\\_publicos/Desarrollo%20de%20los%20planes%20de%20agua](https://www.notinet.com.co/administrativo/servicios_publicos/Desarrollo%20de%20los%20planes%20de%20agua)

<sup>53</sup> Ibid. p.1.



les dificulta el disfrute pleno de este derecho, básico para la subsistencia y para la vida en condiciones óptimas.

El ordenamiento jurídico colombiano, por medio de la Ley 142 del 94, ha dispuesto también un organismo de control tarifario que es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, cuyo cometido institucional es “mejorar las condiciones del mercado de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del país y contribuir al bienestar de la población colombiana. Fija las reglas que deben cumplir todas las empresas prestadoras de los servicios públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo”<sup>54</sup>.

Cuando se legisla en función de “reglas”, que no siempre es sinónimo de reglamentar, se reconoce por parte del legislador y de los ejecutivos que reglamentan, que hay mercado voraz que requiere de ser controlado desde su origen, para que no devore a los usuarios - ¿consumidores? - y les permita ejercer sus derechos a exigir una prestación de servicio y un producto, a un precio justo. El problema radica exactamente en la concepción de justicia, que, en últimas, remite

---

<sup>54</sup> COLOMBIA. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Identificación y naturaleza. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.cra.gov.co/seccion/nuestra-entidad/quienes-somos.html>

a la concepción de derecho de primera generación en el caso del acceso al agua potable y al saneamiento básico.

Unas tarifas de mercado no siempre son tarifas asequibles para los ciudadanos de estratos socioeconómicos bajos; de hecho, pueden no ser justas para estratos altos, pero el nivel de queja en esos niveles de la sociedad es mucho menor y casi nunca involucra una disputa legal por derechos fundamentales, lo que sí ocurre en los estratos 1, 2 y hasta 3. En este contexto, la CRA es muy poco lo que puede aportar directamente a la materialización del derecho al agua, pues sus funciones son tangenciales a este respecto.

De hecho, analistas independientes definen los reales alcances de la CRA como un proceso para “fortalecer el proceso de gestión de las empresas llevando a cabo una mejor planeación de sus estrategias, para que logren el cumplimiento de las metas de calidad y los estándares del servicio y al mismo tiempo cuenten con los recursos necesarios para alcanzarlos en beneficio de su situación financiera y de la satisfacción de sus usuarios”<sup>55</sup>.

---

<sup>55</sup> REDACCIÓN. Empieza a regir nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado En: Revista Dinero. (junio-2016). p.1.

Hablar de conciliar los estándares del servicio con la satisfacción del usuario, hace muy difícil redirigir el tema hacia los derechos humanos, pues los indicadores de éxito de gestión de una entidad no están en sintonía con el poder adquisitivo de la población usuaria de un servicio básico como el agua potable. La regulación de tarifas, en consecuencia, es un mecanismo estatal para hacer más eficientes las Empresas de Servicios Públicos, y el beneficio de los ciudadanos se da más en la categoría de cliente, que de usuario con derechos esenciales.

En consecuencia, sólo la vigilancia a la aplicación de los subsidios tiene una relación directa con la materialización del derecho al agua, que para servicios de acueducto y alcantarillado es hasta del 70% para el estrato 1, 40% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. No obstante, hay entidades como la Defensoría del Pueblo que asumen que los métodos de la CRA para medición de riesgos a las entidades prestadoras son indicadores de aplicación de política en derecho humano al agua, ya que según sus análisis “mediante la Resolución CRA 287 de 2004, se establecieron las pautas para que cada prestador de acuerdo con sus costos de administración, operación, mantenimiento e inversión genere la tarifa que se deberá cobrar a los usuarios; con el fin de garantizar su suficiencia financiera”<sup>56</sup>. No es cómodo conciliar eficacia administrativa con derechos humanos, en un tema prioritario como el agua potable.

---

<sup>56</sup> COLOMBIA. Defensoría del Pueblo. Evaluación del cumplimiento del derecho humano al agua. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. 179 p.

#### **4. EL DERECHO AL AGUA Y SU COMERCIALIZACIÓN, ANÁLISIS CUANTITATIVO**

663 millones de individuos alrededor del orbe no poseen servicios de agua potable en su hábitat. Este registro se traduce en que, por cada 10 habitantes de la tierra, tan solo 1 puede disfrutar del agua tanto para consumo, como para saneamiento básico<sup>57</sup>. Así mismo, y con base en investigaciones de la organización no gubernamental Plan Internacional, más de 4.000 infantes de diversas edades fenecen al día en el mundo por carecer del preciado líquido<sup>58</sup>. La ausencia de agua en su entorno vital induce, además, a la presencia de patologías graves como enfermedades infecciosas varias, diarrea, disentería y cólera, entre otras.

Sin embargo, los gobiernos de la mayoría de los países del mundo han autorizado la comercialización de agua para consumo y en algunas de esas naciones han privatizado total o parcialmente la generación y distribución de agua potable para consumo de sus ciudadanos. El acceso al agua es un derecho humano, pero aún así, el comercio globalizado se ha encargado de convertir este líquido básico para la vida y la calidad de esta, en un artículo mercantil más, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda y no a las que protegen los derechos esenciales de la gente.

---

<sup>57</sup> PLAYGROUND. Estas son las cifras del turbio negocio del agua potable. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: [https://www.playgroundmag.net/now/turbio-negocio-agua-potable\\_22660016.html](https://www.playgroundmag.net/now/turbio-negocio-agua-potable_22660016.html)

<sup>58</sup> Ibid. p.1.

En esa tensión entre derecho y mercado se debate el presente y el futuro del agua, pero no es el único dilema que deberá enfrentar, como lo reseña María Ángeles Fernández:

Necesidad versus derecho. Esta es la disyuntiva en la que se encuentra el agua; recurso básico para la vida, por otro lado. Si se reconoce como un derecho correspondería a los Gobiernos o a los Estados proveer de agua a sus ciudadanos; en cambio, si se considera al agua como una necesidad, el sector privado y el mercado tendrían espacio para gestionar este recurso a cambio de un precio, traducido en beneficio económico para las empresas suministradoras<sup>59</sup>.

Si sólo el 3 por ciento del agua que compone el planeta tierra es dulce y únicamente el 1 por ciento es apta para el consumo humano<sup>60</sup>, no es difícil concluir que la comercialización de este recurso es fuente de desequilibrio ambiental y de gran afectación de la salud pública mundial, pues la rentabilidad que siempre busca el comercio entra en franca disparidad con el derecho humano universal a disfrutar del agua potable como elemento esencial para la subsistencia de los seres humanos.

---

<sup>59</sup> FERNÁNDEZ, María Ángeles. El negocio del agua embotellada. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.desplazados.org/wp-content/uploads/2013/02/El-negocio-del-agua-embotellada-In%C3%A9ditos-01-04-11.pdf>

<sup>60</sup> MORAL, Cristina. ¿Sabes cuántos litros de agua necesita una persona al día? [En línea]. [22 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://blog.ferrovial.com/es/2015/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/>

Las cifras más sólidas que se han registrado datan de un estudio hecho entre 1997 y 2004, cuando se pudo establecer de forma fidedigna que el negocio de envasar agua movió más de 120.000 millones de euros y el consumo en el mundo fue de más de 150.000 millones de litros como lo discrimina el siguiente cuadro:

**Tabla 1. consumo de agua embotellada por regiones de 1997 a 2004**

Regions	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004 (P)
Europe	34,328	36,074	39,965	42,276	44,520	47,037	51,768	53,661
North America	25,398	25,822	29,695	31,850	34,734	38,349	41,778	44,715
Asia	12,472	14,820	17,647	21,170	24,824	29,783	32,795	35,977
South America	5,484	6,362	7,323	8,528	9,915	11,437	12,677	13,607
Africa/Middle East/ Oceania	2,459	2,808	3,092	3,456	3,837	4,302	4,499	4,823
All Others	508	1,953	737	891	1,033	1,592	1,407	1,597
<b>TOTAL</b>	<b>80,649</b>	<b>87,838</b>	<b>98,459</b>	<b>108,171</b>	<b>118,864</b>	<b>132,499</b>	<b>144,925</b>	<b>154,381</b>

Fuente: The World Water

Este mismo estudio calculó que en 2017 se venderían en el comercio mundial 250.000 millones de litros de agua envasada<sup>61</sup>; aunque no hay un estudio posterior que lo haya confirmado, sí hay registros de que en 2016 la comercialización de agua en botellas plásticas superó los 10.237 millones de dólares al año, una cifra tan voluminosa que representa más del producto interno bruto de países como Haití<sup>62</sup>. Otras evaluaciones macroeconómicas sustentan cifras sobre el comercio de agua

---

<sup>61</sup> FAYANAS, Edmundo. El escandaloso negocio del agua embotellada. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/escandaloso-negocio-agua-embotellada/20171227165446146742.html>

<sup>62</sup> FORERO, Gabriel. Venta de agua en botella mueve US\$10.237 millones. En: La República. Bogotá: (16 feb. 2016). p.1.

envasada que indican un monto de 300.000 millones de dólares con amplias posibilidades de crecimiento<sup>63</sup>.

Crecimiento empresarial privado, en detrimento de recursos naturales y del disfrute del derecho humano al agua para las personas. “En el caso de Colombia, las cifras arrojan que durante 365 días se consumen 949,6 millones de litros de agua, que representan US\$438,9 millones. Raúl Ávila, experto en industria de la Universidad Nacional, dijo que el mercado local de agua ha crecido a tasas de 4% o 5% y ha generado la creación de alrededor de 800 compañías comercializadoras de agua en botella”<sup>64</sup>.

800 compañías colombianas venden agua en recipientes plásticos, mientras, por ejemplo, el departamento de La Guajira sufre de una escasez crónica de este recurso vital para consumo de sus habitantes. El tema, no obstante, va más allá de las cifras, que en la materia son bastante discutibles como lo registra Pacheco-Vega: “Uno de los grandes problemas que tienen los analistas de la industria del agua embotellada es la dificultad de obtener cifras confiables sobre producción, distribución y consumo”<sup>65</sup>. El tema de fondo es jurídico y tiene que ver con la

---

<sup>63</sup> VIDAL, Carmen. El agua es el problema ambiental más grande del mundo. [En línea]. [21 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.ecoclimatico.com/archives/el-agua-es-el-problema-ambiental-mas-grande-del-mundo-517>

<sup>64</sup> FORERO, op. cit.

<sup>65</sup> PACHECO-VEGA, Raúl. Agua embotellada en México: de la privatización del suministro a la mercantilización de los recursos hídricos. En: Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. XXII No. 63. (May-ago. de 2015). p.221-263

flagrante violación que las empresas comercializadoras de agua internacionales y nacionales hacen del derecho internacional de los de los derechos humanos en materia de consumo de agua potable, sólo que las cifras, aún con su vulnerabilidad, nos acercan objetivamente a la gravedad del problema.

Por esta razón de peso es que el análisis cualitativo es el centro de este trabajo, pues es un hecho probado que “obtener datos sobre extracción, envasado, distribución y consumo de agua embotellada es sumamente difícil a menos que se paguen cantidades exorbitantes para poder leer los reportes de estudios de mercado”<sup>66</sup>. Dificultad que no está desligada del deseo de las grandes productoras de agua envasada, sobre todo multinacionales, de evitar estudios e investigaciones que desvelen ante la opinión pública mundial sus malas prácticas medioambientales y, lo que es más grave, su nefasta contribución a poner trabas comerciales al ejercicio pleno del derecho a consumir agua potable por parte de los ciudadanos, de forma natural, protegida y sin que esté sujeta a las insensibles leyes del mercado.

El aumento vertiginoso del negocio mundial de producción de agua embotellada tiene a la humanidad ante una dicotomía vital: o protege los derechos humanos de las personas y tutela el consumo de agua como parte de ellos, o continúa patrocinando el comercio indiscriminado de agua envasada con todos los riesgos ecológicos, sociales, culturales y jurídicos que ello acarrea.

---

<sup>66</sup> Ibid. p. 224



## **5. EL DERECHO AL AGUA: ENTRE MITOS, VERDADES, DEMAGOGIA Y REALIDADES GEOPOLÍTICAS**

Siempre que se aborda el tema de derechos humanos y particularmente cuando se amplía el horizonte inclusivo a temas como el agua, es inevitable el concurso de vertientes ideológicas, políticas y jurídicas que pretenden una presencia superior de sus tesis al momento de incorporar un ámbito determinado al ordenamiento constitucional y legal de una nación; más aún, cuando entidades como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos determina que “el agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona”<sup>67</sup>.

Esta declaración del máximo ente rector de los derechos humanos en el mundo, que en teoría no tiene mayor discusión, sí se presta para toda una carga ideológica de diversas fuentes que afectan de manera decisiva el curso de los debates legislativos y terminan influyendo directamente en la estructuración de los articulados constitucionales y normativos, no siempre armados de verdades, ya que la imponencia de la mencionada premisa de la ONU en materia de agua se presta

---

<sup>67</sup> NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. “El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35”. p.1. [En línea]. [13 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf>

para ríos enteros de tinta política con muchos intereses en juego, que van más allá de la garantía de los derechos humanos en la materia.

Por tal motivo, en este capítulo disertaré sobre los mitos y verdades que rodean al ámbito del derecho al agua, para demostrar que, en Colombia, este se afecta por diversos factores relacionados con la comercialización de agua. Se desvelarán las ramificaciones parcializadas que se gestan desde intereses políticos y empresariales, con el fin de usar la legislación en beneficio de sus propósitos singulares, en detrimento del bien público en materia del líquido indispensable para la vida humana.

El agua es un recurso natural de importancia vital como ningún otro. Cuando se eleva a la categoría de derecho humano lo que se tutela en realidad es el uso, por una parte, y su función ecológica por otra. No ha sido fácil conciliar las dos posturas en materia de garantías básicas constitucionales porque los dos escenarios vienen de sectores muy segmentados que se unen estratégicamente para ciertos fines, pero no necesariamente para otros, como en el caso del agua.

Rocha, Martínez y González intentan explicarlo de forma sucinta:

“El agua posee una doble condición. Por una parte, es un recurso necesario para salvaguardar el equilibrio de los ecosistemas y de la vida humana, y a su vez se

concibe como materia prima susceptible de explotación económica y generación de riqueza. A partir de ello, se construyen dos concepciones teóricas y opciones políticas diferenciadas: la primera, parte de entender el agua como un derecho de carácter fundamental, y la segunda que reconoce al agua un valor económico intrínseco, adjudicándole la connotación de bien mercantil<sup>68</sup>.

En el primer caso, los defensores de los derechos humanos desde la óptica geopolítica propenden permanentemente por la ampliación de las categorías a proteger por las normas internacionales que, según la estructura jurídica de cada nación, se incorporan a su legislación como es el caso de Colombia. El bien que se tutela tiene varias implicaciones para su goce completo, pues hace referencia al consumo directo de fuentes naturales, a la cobertura en edificaciones rurales y urbanas para consumo potable, aseo y saneamiento, y a un acceso factible al servicio, asequible para sectores vulnerables a nivel socioeconómico, entre otras variables.

El problema de fondo es que, para el segundo caso, algunos de estos factores riñen con la protección que un Estado como Colombia brinda a la libre empresa, a la inversión extranjera y a la comercialización de los servicios públicos, lo que en la

---

<sup>68</sup> ROCHA, Johana, MARTÍNEZ, Nury y GONZÁLEZ, María. El agua escasea, las empresas transnacionales se enriquecen y el derecho lo permite. p.2. [En línea]. [21 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/09/07/normas-icontec-para-trabajos-escritos-citas/>

práctica convierte a este derecho fundamental en un derecho relativo donde los factores contextuales juegan y apuestan duro a la hora controvertir la garantía estatal sobre su producción para consumo humano y sobre los costos de consumirla, lo que a juicio de este autor, deja en letra herida lo ya legislado y lo que está en proceso de convertirse en norma constitucional.

No se desconoce la amplia gama de activismo que a través del mundo ha conseguido algunas victorias importantes en cuanto a limitar la acción de los empresarios del agua cuando violan de manera sistemática el derecho humano respectivo. Son acciones que reivindican la preeminencia y el factor preponderante de los derechos humanos sobre los del comercio, al menos en la letra jurídica:

“Estos mínimos avances se fundan en el principio de que, aunque los Estados tienen la responsabilidad primaria de proteger los derechos humanos, las empresas multinacionales y otras empresas comerciales – incluyendo a sus directivos y a las personas que trabajan para ellos – son también responsables de promover y asegurar los derechos humanos, entre ellos el derecho al agua, en todos los territorios, en los términos en que se establece en los principales instrumentos sobre la materia”<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup> Ibid. p. 16.

Tan pronto entró en vigor la carta política de 1991, la primera Corte Constitucional por medio de jurisprudencia, examinó, reconoció y desplegó un derecho esencial designado como mínimo vital, en razón a que procede de los elementos paradigmáticos del Estado Social de Derecho, el decoro humano y la protección fundamental. De igual modo, por exponer una apretada correspondencia con otros derechos constitucionales de primera generación como a la vida y a la integridad personal, que se manifiesta en fallos en los que se obliga a conceder amparo específico a ciudadanos en contextos de vulnerabilidad ostensible<sup>70</sup>.

Pues a pesar de estos fallos, las empresas comercializadoras de agua siguen apropiándose de recursos hídricos naturales para embotellar lo que en el papel es un derecho básico. Vender agua potable es incompatible con el derecho de todo ciudadano a disfrutar de este líquido y se traduce en el reconocimiento implícito de que los grandes negocios, más cuando hay multinacionales detrás, están por encima de la Constitución independiente de si protegen derechos básicos de la población. No es aceptable sugerir que el negocio de vender agua no afecta el consumo que los ciudadanos realizan en sus casas, donde algunos estratos, inclusive, reciben subsidios. Y no es aceptable porque lo que está en juego es la

---

<sup>70</sup> CUADROS, Camilo. Acercamiento al derecho fundamental al mínimo vital del agua potable y su prestación como servicio público domiciliario en Colombia. Santiago de Cali, 2004, 108 p. Trabajo presentado en modalidad de monografía (como requisito para optar al título de abogado). Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Facultad de humanidades y ciencias sociales. Departamento de ciencia jurídica. Carrera de Derecho.

estructura jurídica del mineral más esencial para la vida humana que, al tolerarse su inclusión en el mercado abierto, pone en riesgo su protección por parte del Estado colombiano para materializar su condición de derecho fundamental y los mínimos de los que jamás puede ser privado un ciudadano. ¿Garantizaría una empresa que vende agua el mínimo vital a sus consumidores sin costo alguno?

Y es que hay un mito generalizado en todos los debates sobre el consumo al agua y es el relativo a su derecho absoluto como factor determinante en la vida y en la calidad de vida de un ser humano. Es mito porque una cosa es la descripción química, biológica y médica de lo que significa el agua para la subsistencia humana y otra su carácter jurídico donde intervienen demasiados intereses con gran poder, donde lo esencial pierde fuerza frente a los factores macroeconómicos que inciden de manera directa en el ejercicio de los derechos ciudadanos, quiérase o no<sup>71</sup>.

La dicotomía entre derecho humano y derecho de comercio no es una simple elucubración ideológica latinoamericana, pues “la doble calificación de bien común de la humanidad y de mercancía trae consigo una serie de preocupaciones sociales que inquietan a los comentaristas europeos”<sup>72</sup>. Cavilar en la posibilidad del agua

---

<sup>71</sup> BARRETO, Antonio. Gestión local y libre mercado en el servicio público domiciliario de acueducto: la experiencia del abuso de la posición de dominio en Francia y Colombia. En: Precedentes. Vol. 5. (jul-dic. 2014). p. 75-122.

<sup>72</sup> Ibid., p.80.

como artículo de comercio no es una acción novedosa. Hay ejemplos que van desde envases con transparencias acuíferas inverosímiles, hasta piscinas turísticas, en cuyo corredor intermedio se puede hallar alta ingeniería de represas, acueductos y redes de agua potable de pago.

Surge entonces el cuestionamiento de quién controla, cómo vende y cuánto se cobra por el “derecho fundamental”. En Colombia hay cantidad de derechos que requieren de ponderación de las altas Cortes, incluso el relativo a la vida que se ve tambaleante ante el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, la despenalización parcial del aborto en tres casos aceptados por el Pacto de San José<sup>73</sup>, y el eterno debate sobre la pena de muerte para delitos considerados atroces. Al agua le ocurrirá algo similar, pero con argumentos más sutiles en contra del pretendido derecho absoluto, pues los negociantes del preciado líquido se autoproclaman protectores de éste ya que “la gente no sabe usarlos y por tanto hay que cobrarlos, para que entiendan su importancia”<sup>74</sup>.

Resulta paradójico que a la par con el nacimiento de la Constitución de 1991 en el país, definida como garantista en el marco de un Estado Social de Derecho, se haya

---

<sup>73</sup> COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. [En línea]. [12 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm>

<sup>74</sup> VILLAMIZAR, Sebastián. El derecho a cobrar el agua. [En línea]. [14 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.semana.com/opinion/articulo/el-derecho-cobrar-agua/341983-3>

dado vía libre a lo que se llamó de forma eufemística “apertura económica”, un modelo que introdujo al país a la globalización económica que algunos apocalípticos llaman el capitalismo salvaje<sup>75</sup>. Por eso es relevante destacar la advertencia que hace Cuadros al respecto cuando afirma que el “Estado no solo debe garantizar los derechos fundamentales frente a lo público, sino frente a lo privado, incluyendo los derechos sociales económicos, dentro de ese marco internacional como supranacional, para así combatir la crisis del constitucionalismo frente a una globalización sin reglas ni controles que acentúa las diferencias entre las personas”<sup>76</sup>.

Hay otro mito, más grande aún, que se difunde sobre el derecho al agua y es el que dice que debe suministrarse de manera gratuita a la población. No existe ningún convenio internacional que deje sentada esa presunta obligación de los Estados, ni mucho menos una liga jurídica vinculante que le permita a los ciudadanos de cualquier nación exigir el consumo de agua potable rural o urbana, o el servicio de acueductos y alcantarillados sin pagar por ello. De hecho “el marco de los derechos humanos no establece el derecho a un suministro de agua gratuito. Sin embargo, en determinadas circunstancias, el acceso a agua potable y servicios de

---

<sup>75</sup> PACHECO, Roxana. Capitalismo salvaje. [En línea]. [3 de septiembre de 2018]. Disponible en: <https://www.aporrea.org/tiburon/a23331.html>

<sup>76</sup> VILLAMIZAR, op. cit, p14.



saneamiento puede tener que ser gratuito, si la persona o la familia no pueden pagar”<sup>77</sup>.

A pesar de toda la jurisprudencia existente en Colombia y así pase el acto legislativo que está en curso para declarar el agua como derecho de primera generación, la mayoría de los ciudadanos colombianos tendrán que pagar por tomar agua potable y por los servicios de saneamiento básico. A la hora de ponderar derechos, las altas Cortes, con base en su historial de sentencias, asumirán que sólo la sostenibilidad de la prestación del servicio puede garantizar su continuidad y calidad al grueso de la población, y protegerán de manera excepcional a poblaciones específicas que en un contexto determinado no puedan acceder al pago del líquido vital<sup>78</sup>. Pero gratuidad no habrá, así sea estipulada el agua como derecho fundamental.

Y es que el acto legislativo que está pendiente de algunos debates para ser reformador de la carta magna no prevé tocar la esencia de la prestación del servicio autorizada por la Constitución de 1991 que en su artículo 365 “enuncia que la prestación de los servicios públicos puede ser prestada por “particulares”. La expresión “particulares” es ambigua porque da a entender que todas las personas naturales o jurídicas, ajenas al derecho público, pueden aprovechar esta

---

<sup>77</sup> NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. op. cit, p. 12.

<sup>78</sup> SUTORIUS, Mies y RODRÍGUEZ, Sonia. La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia. En: Derecho del Estado. No. 35. (jul-dic. 2015). p. 243-265.

oportunidad negocial. No obstante, son las grandes empresas las que cuentan con la oportunidad real de usufructuar esta actividad con ánimo de lucro”<sup>79</sup>.

Comercio protegido sutil, pero efectivamente, ahí, entre las bambalinas de los derechos fundamentales. Letra es lo que les sobra a los derechos humanos relativos a la prestación de los servicios públicos como el agua y como ejemplo se puede evidenciar la opinión del exmagistrado José Gregorio Hernández Galindo quien afirma que el “concepto de Estado Social de Derecho ordena no solamente cumplir con ciertas funciones sino también producir unos efectos dentro de la comunidad, desde el punto de vista de las necesidades concretas. Esto incluye un compromiso con la realidad en los campos: económico, político y social”<sup>80</sup>.

Pero el compromiso del que habla con autoridad el magistrado Hernández Galindo tiene un dique en la práctica y es el comercio de uno de esos bienes protegidos como el agua. Dique porque contiene la ola garantista sobre acceso público al agua potable, pero a su vez, involucra la ponderación jurídica del derecho fundamental a proveerse del líquido, versus el derecho a la libre iniciativa, es decir, a vender agua a consumidores de mercado, no a ciudadanos con derechos básicos protegidos por

---

<sup>79</sup> SUÁREZ, Federico. El referendo constitucional para que el acceso al agua sea un derecho fundamental. En: Revista Derecho del Estado, n.º 24, (julio de 2010). p. 241.

<sup>80</sup> HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio, Los servicios públicos en la Constitución Política, en: Los servicios públicos como instrumento de solidaridad y cohesión social del Estado. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2005, p. 60.

la constitución. El derecho humano al agua se ve totalmente afectado en Colombia por quienes comercializan agua bien sea en botellas, o a través de contratos para la prestación de un servicio público.

El análisis tiene una lógica desde el mercado. La intervención del capital privado en cualquier proyecto involucra recubrir sus objetivos de un legítimo propósito de rentabilidad. Para conseguirlo, los inversionistas deben cobrar a los ciudadanos por un servicio público que les fue encomendado legalmente y que cuenta hasta con una entidad que regula este aspecto tarifario, que, en teoría, existe para la protección de los usuarios pero que en la realidad su accionar refleja que la “tarifa se ha incrementado a efectos de garantizar la rentabilidad que su inversión de capital reclama, acorde con, al menos, la tasa media de ganancia del capital y superada, en muchos casos...según estudios oficiales”<sup>81</sup>.

La regulación se implementó como medida de control luego de autorizar la intervención de capital privado en la prestación de los servicios públicos. Si bien el agua potable, las redes de acueducto y las de alcantarillado que llegan a hogares y edificaciones en general son absolutamente estatales en Colombia, ello no implica que los ciudadanos tengan derecho al servicio sin un costo mínimo. Ni siquiera los

---

<sup>81</sup> SUÁREZ., op. cit. p.138.

ciudadanos de más bajo puntaje en el Sisbén pueden acceder gratuitamente a éstos, como sí pueden hacerlo, por ejemplo, al sistema general de salud.

El agua para consumo humano no sobra. “Si bien el agua es uno de los elementos más abundantes de nuestro planeta, poco a poco se está convirtiendo en un bien escaso a causa de los cambios climáticos, la contaminación y su desaprovechamiento”<sup>82</sup>. Y la escasez de un bien económico que posee alta demanda lo convierte en un bien costoso para cualquier consumidor. A pesar de todas las regulaciones, prestar los servicios de agua para consumo humano y para saneamiento básico tiene costos elevados para países de América Latina<sup>83</sup>, independiente de que el prestador sea un Estado, o un particular regulado por un Estado.

Un principio general del Derecho reza que nadie puede ser obligado a lo imposible. Eso aplica también para los Estados, ya que así haya suficiente legislación en materia de derecho al agua, nadie puede obligar a una nación a poner en riesgo su estabilidad fiscal ni la sostenibilidad misma del servicio hídrico, con decisiones tales como brindar gratuitamente el acceso al preciado líquido a la población, ni siquiera

---

<sup>82</sup> LA NACIÓN, Editorial. Agua, un recurso escaso y estratégico. En: La Nación, Buenos Aires. (3 de abril de 2008). p.1.

<sup>83</sup> OJEDA, Eduardo y ARIAS, Raúl. Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia. Bogotá: Cepal, 2000. 77p.

a un sector de la sociedad por más vulnerable que sea, exceptuando casos puntuales reconocidos por vía judicial.

La propia relatora de la ONU para los Derechos Humanos relativos al agua, Catarina de Albuquerque, en un escrito tan sutil como revelador, reconoce que detrás de todo el andamiaje jurídico internacional sobre este derecho, permanecen intactas realidades que son inamovibles a la hora del pretendido disfrute total por parte de los ciudadanos de las naciones que han firmado estos pactos vinculantes:

Todos los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos al agua y al saneamiento, están sujetos al principio de “realización progresiva”. Decir realización progresiva es casi tanto como afirmar que los Estados partes tienen el deber (...) de adoptar “medidas deliberadas, concretas y selectivas” en pos del cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, reconociendo al mismo tiempo que la plena realización de los derechos humanos es un proceso a largo plazo que a menudo se enfrenta a numerosas limitaciones<sup>84</sup>.

Realización progresiva dice la relatora. ¿Hay antecedentes de la protección a derechos fundamentales que se sometan a una “realización progresiva”? En Colombia, la naturaleza de la acción de tutela fue exactamente la de implementar

---

<sup>84</sup> DE ALBUQUERQUE, Carolina. Derechos hacia el final. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento. Lisboa: Ongawua, Ingeniería para el desarrollo humano, 2012. p. 28.

una vía rápida para la protección de los derechos fundamentales vulnerados por un agente estatal o por un particular, sin esperar un proceso ordinario ante el sistema de justicia<sup>85</sup>. No son compatibles, en teoría, la declaratoria de un derecho como básico y esencial, con la proclamación legal de que su realización será mediatizada en el tiempo.

Pero, por más contradictorio que pueda parecer, así funciona el derecho al agua. Aunque pueda constituirse como el más fundamental de los derechos por ser la base de la vida humana, la puesta en funcionamiento del proceso implica grandes inversiones y el Estado colombiano, que es pionero en el continente en la materia, no tiene aún manera de garantizar acceso, suministro, cobertura, calidad y gratuidad en un mismo paquete.

En el lapso comprendido entre 1999 y 2007 la infraestructura para llevar agua potable y saneamiento básico requirió de inversiones por 6.820 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 852 millones de dólares al año; así mismo, entre los años 2003 y 2006 se dispusieron recursos equivalentes al 0,62% del Producto Interno Bruto, cifra récord para un país latinoamericano<sup>86</sup>. En 2013 se efectuaron

---

<sup>85</sup> YOUNES, Diego. La acción de tutela. En: Revista Derecho Público. Vol. 18. No. 31. (Ene. 2005).

<sup>86</sup> Las cifras corresponden a los recursos ejecutados o administrados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de los programas del Presupuesto General de la Nación. También se han contabilizado recursos invertidos por medio del Fondo Nacional de Regalías y las transferencias ordenadas en la Ley 715 de 2001. Ampliación de estas cifras se puede hallar en [https://es.wikipedia.org/wiki/Agua\\_potable\\_y\\_saneamiento\\_en\\_Colombia#Inversiones\\_y\\_financiamiento](https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable_y_saneamiento_en_Colombia#Inversiones_y_financiamiento)

inversiones superiores a los 4 billones de pesos que “corresponden a: 1,3 del programa Agua para la Prosperidad (antiguos Planes Departamentales de Agua); 723 mil millones de proyectos emblemáticos, 830 mil del Presupuesto General de la Nación, 822 mil de regalías y 508 mil de otras fuentes”<sup>87</sup>.

El dato más actualizado de la inversión fue en 2017 para el litoral pacífico con un rubro de 358 millones de dólares para beneficiar a los departamentos de Chocó y Nariño prioritariamente<sup>88</sup>. “De acuerdo con el CONPES 3810, las regiones en donde se hace un mayor esfuerzo de inversión y acciones para mejorar el acceso a agua potable y saneamiento básico son las que presentan unas menores tasas de mortalidad y morbilidad por EDA en menores de 5 años”<sup>89</sup>.

No basta el reconocimiento del derecho al agua para que ésta pueda disfrutarse sin costos, algunos tan altos para ciertas poblaciones, que aquél se queda como victoria pírrica. El agua, en términos jurisdiccionales, es un tema que se asume desde la

---

<sup>87</sup> DINERO. Infraestructura. Gobierno invierte más en agua y saneamiento. En: Revista Dinero. (mar-2013). p.1.

<sup>88</sup> COLOMBIA. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Firmados créditos por USD 358 millones para proyectos de agua potable, saneamiento básico y energización en el Litoral Pacífico. [En línea]. [1 de septiembre de 2018]. Disponible en: [http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=kQMonBpQy0qm1gj\\_9VWavrD6UJ6kA7LFDwMr8ilcODp0t5Du1b1c!-306149971?nodeId=%2FOCS%2FP\\_MHCP\\_WCC-063700%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased](http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=kQMonBpQy0qm1gj_9VWavrD6UJ6kA7LFDwMr8ilcODp0t5Du1b1c!-306149971?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-063700%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

<sup>89</sup> CARRASCO, William. Estado del arte del agua y saneamiento rural en Colombia. [En línea]. [2 de septiembre de 2018]. Disponible en: <https://ingenieria.uniandes.edu.co/Paginas/Noticias.aspx?nid=29>

extrema pobreza de poblaciones del llamado tercer mundo, que en países desarrollados ni se piensa como derecho. Aigul Safiullina, analista argentina, afirma que “aunque los países más pobres invierten más dinero proporcionalmente en políticas de agua y saneamiento que los países ricos, el 66% dice que el financiamiento no es suficiente para lograr las metas del acceso al agua potable. Uno de cada cuatro de esos países no reconoce el acceso al agua potable como derecho humano”<sup>90</sup>.

Por ello la idea expuesta en esta tesis, aunque pueda no tener gran consenso por no ser “políticamente correcta”, si tiene algunas coincidencias en académicos que reconocen, por ejemplo, que en “este ámbito, el derecho al agua se viola cuando se evidencia que el Estado no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para hacer efectivo el derecho, o se comprueba la negligencia para adoptar estrategias de acción que lleven a su satisfacción plena para todos los habitantes”<sup>91</sup>.

---

<sup>90</sup> SAFIULLINA, Aigul. Agua: un derecho humano al que no todos acceden. En: La Nación. (Buenos Aires). 2014. p.1.

<sup>91</sup> DÁVILA, Santiago. El agua como un derecho humano. Bogotá, 2015, p 13. (Especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales). Universidad Militar Nueva Granada, facultad de Derecho. El texto en cursiva es decisión del autor de la presente tesis, para resaltar que corresponde al art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.



## **6. PROPUESTA PARA QUE EL DERECHO AL AGUA EN COLOMBIA SE MATERIALICE CADA VEZ MÁS**

¿Cómo resolver un asunto tan complejo? Deberá partirse de un análisis honesto del contexto en donde regirá este derecho, para que se armonice la legislación con las posibilidades reales del Estado colombiano de llevar cobertura, calidad, acceso y asequibilidad a los estratos socioeconómicos que están en la base de la pirámide social, evitando al máximo la politización polarizadora de un tema que tiene innegables aristas ideológicas, pero que debe reducirse a una mínima expresión para que subsista la lógica presupuestal de la mano de las garantías constitucionales y legales. Si un derecho de esta magnitud se aplica sin planeación estratégica, estará condenado a su insostenibilidad y allí sí que se violará todo el principio que lo sustenta.

Lo anterior es imperativo, aún a pesar de pronunciamientos jurisprudenciales como el de la Honorable Corte Constitucional donde de manera singular desconoce la labor presupuestal a la hora de garantizarle una parte del derecho al agua a una comunidad: “La obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero

y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas”<sup>92</sup>.

No deja de ser cuestionable que una alta Corte desconozca la importancia presupuestal a la hora de exigir a las autoridades competentes que garanticen un derecho básico que está sujeto a grandes inversiones, de nivel macroeconómico inclusive. Este tipo de pronunciamientos son de buen recibo social, pero no siempre están en sintonía con la disponibilidad económica de los gobiernos, aún de aquéllos que se caracterizan por la pulcritud de sus manejos. El derecho al agua puede ser vulnerado también por la irresponsabilidad, o la ligereza de magistrados que se portan como activistas jurídicos en algunas sentencias.

Es aquí donde la progresividad expuesta por la relatoría de la ONU cobra plena vigencia, y se desarrolla al ritmo que impone la realidad fiscal y no el deseado por los mentores de este derecho humano, lo que mantendrá una tensión permanente desde los dos extremos, el de la exigencia inmediata de la protección constitucional y el que recuerda que no hay dinero suficiente para que tal fin se materialice totalmente. La buena noticia para el ejercicio de esta garantía de primera generación es que “el hecho de que el desarrollo de un derecho se realice de manera

---

<sup>92</sup> COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia T- 312 de 2012. Acción de tutela para solicitar protección del derecho al agua. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

progresiva, no significa que no se pueda exigir ante las autoridades judiciales la salvaguarda de este, puesto que esto requiere por lo menos que las autoridades administrativas cuenten con un plan que permita prever la manera en que se irá consolidando el desarrollo correspondiente”<sup>93</sup>.

En esencia, el derecho al agua con sus avales constitucionales actuales y con la norma explícita que pueda venir en un acto legislativo, dependerá para su materialización integral, de la ayuda constante de las altas Cortes para garantizar a los ciudadanos más vulnerables el pleno disfrute y/o la restitución de su derecho, pero jamás una sentencia podrá modificar de golpe la estructura fiscal de la nación y allí es donde la letra legislada, tenderá a morir ante las realidades macroeconómicas del mundo globalizado, que lo sufren mayoritariamente los países en vías de desarrollo.

---

<sup>93</sup> DÁVILA, op. cit. p.28.

## CONCLUSIONES

Ha quedado claro ya que la consabida progresión en la implementación del derecho al agua es inevitable. Por este motivo, la ciudadanía colombiana debe empoderarse de las herramientas jurídicas eficaces que le pueden servir para que esta garantía constitucional y legal se materialice cada vez más, en medio de las dificultades económicas de una nación del tercer mundo. Hacer que no sea letra muerta será una labor titánica, pero factible, si se tiene claridad sobre qué, cómo y dónde pedir el ejercicio de este derecho humano.

Independiente de si la Constitución hace explícito este derecho, ya se ha dejado claro también en que hay suficiente jurisprudencia y legislación en Colombia sobre el agua como derecho de primera generación, esencial, básico para la vida humana de calidad. Lo relevante de los tiempos actuales es cómo las comunidades se organizan y ponen sobre el escenario jurídico, político y social de la nación sus propuestas y realizaciones en materia de agua potable y saneamiento básico, como medidas para adelantarse a sus gobernantes y poder exigir con hechos la materialización de esta garantía internacional y nacional referente al recurso hídrico.

Así lo ejercen muchos activistas, líderes sociales y organizaciones comunitarias del derecho al agua, un ejemplo del cual se ve en el siguiente comentario:

En este sentido, a pesar de ser hundida la pretensión constitucionalista, actualmente los sectores populares buscan ejercer legítimamente su derecho de decidir autónomamente sobre las aguas en los territorios. Cómo no entender de esta manera la gestión comunitaria que han realizado por décadas los acueductos comunales en cada rincón de este país, o la sanción de acuerdos municipales, que en algunos casos han reconocido el derecho al agua, en la prohibición de actividades minero – energéticas que se encuentran en detrimento del líquido vital, o el impulso que han tenido múltiples procesos de consultas populares que en última instancia son un esfuerzo por decidir popularmente sobre el uso de las aguas .

El agua es un derecho tan inherente al entorno vital de los ciudadanos, que no bastará con ejercer acciones judiciales para su reconocimiento en contextos particulares. Se requiere de una organización comunitaria que defienda los recursos hídricos naturales, gestione la cobertura y el acceso, y propenda por unas tarifas de servicio acordes con la situación de cada estrato y de cada comunidad. Vencer las políticas de regulación actuales, que defienden al prestador más que al usuario, deberá ser el reto mayor de las comunidades en materia del ejercicio del derecho al agua.

## BIBLIOGRAFÍA

- ACHING, César. Capitalismo, imperialismo, globalización y neoliberalismo. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.eumed.net/ce/2010a/cag.htm>
- BAENA, María. Energía y agro, los que más contaminan en Colombia. [En línea]. [19 de octubre de 2017]. Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/energia-y-agro-los-mas-contaminan-colombia-articulo-597374>
- BARRETO, Antonio. Gestión local y libre mercado en el servicio público domiciliario de acueducto: la experiencia del abuso de la posición de dominio en Francia y Colombia. En: Precedentes. Vol. 5. (jul-dic. 2014). p. 75-122.
- BECERRA, José y SALAS, Irma. El derecho humano al acceso al agua potable: aspectos filosóficos y constitucionales de su configuración y garantía en Latinoamérica. En: Revista Prolegómenos - Derechos y Valores – Vol. XIX. No. 37. (Ene-jun.2016) p. 141.
- CARRASCO, William. Estado del arte del agua y saneamiento rural en Colombia. [En línea]. [2 de septiembre de 2018]. Disponible en: <https://ingenieria.uniandes.edu.co/Paginas/Noticias.aspx?nid=29>
- CENTRO DE NOTICIAS ONU. Asamblea General reconoce como derecho humano el acceso al agua. [En línea]. [18 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=18853#.Weo1-WjWzIU>
- COLOMBIA. Alcaldía Mayor de Bogotá. Decreto 064\_del 15 de febrero de 2012. Por medio del cual se reconoce el derecho al consumo mínimo vital de agua potable en los estratos 1 y 2 en la ciudad de Bogotá.
- COLOMBIA. Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Identificación y naturaleza. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.cra.gov.co/seccion/nuestra-entidad/quienes-somos.html>
- COLOMBIA. Congreso de la República. Ponencia para primer debate al proyecto de ley 171 de 2008 Cámara. [En línea]. [1 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=11&p\\_numero=171&p\\_consec=23951](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=11&p_numero=171&p_consec=23951)
- COLOMBIA. Congreso de la República. Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. Bogotá, D.

C., 22 de marzo de 2017. [En línea]. [11 de abril de 2018]. Disponible en:  
<https://vlex.com.co/vid/proyecto-acto-legislativo-14-676164741>

COLOMBIA. Congreso de la República. Proyecto de acto legislativo 054 de 2008, Cámara. [En línea]. [2 de abril de 2018]. Disponible en:  
<https://vlex.com.co/vid/proyecto-acto-legislativo-ca-mara-451343106>

COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2007. M.P. Jaime Araújo Rentería. Reconocimiento del derecho al agua en el ordenamiento interno. Sentencia T-725 de 2011. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Disponibilidad, calidad y accesibilidad. Sentencia T-273 de 2012. M.P. Nilson Pinilla Pinilla. Derecho al agua potable destinada al consumo como fundamental. Sentencia C-220 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Naturaleza jurídica del derecho al agua. Sentencia T-348 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Jurisprudencia constitucional sobre la tutela del goce efectivo del derecho al agua. Sentencia T-764 de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Reiteración de jurisprudencia sobre el derecho al agua en establecimientos carcelarios. Sentencia T-707 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Derecho al agua y al saneamiento básico en el ámbito internacional.

COLOMBIA. Defensoría del Pueblo. Evaluación del cumplimiento del derecho humano al agua. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2012. 179 p.

COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia C-355 de 2006. [En línea]. [12 de abril de 2018]. Disponible en:  
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm>

COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia T- 312 de 2012. Acción de tutela para solicitar protección del derecho al agua. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

COLOMBIA. Honorable Corte Constitucional. Sentencia T-475/17

COLOMBIA. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Firmados créditos por USD 358 millones para proyectos de agua potable, saneamiento básico y energización en el Litoral Pacífico. [En línea]. [1 de septiembre de 2018]. Disponible en:  
[http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=kQMonBpQy0qm1gj\\_9VWavrD6UJ6kA7LFDwMr8ilcODp0t5Du1b1c!-306149971?nodeId=%2FOCS%2FP\\_MHCP\\_WCC-063700%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased](http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty;jsessionid=kQMonBpQy0qm1gj_9VWavrD6UJ6kA7LFDwMr8ilcODp0t5Du1b1c!-306149971?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-063700%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased)

COLOMBIA. Senado de la República. Proyecto de acto legislativo 11 de 2016 Senado. Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. [En línea]. [10 de abril de 2018]. Disponible en:

[http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=03&p\\_numero=11&p\\_consec=44064](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=11&p_consec=44064)

COLOMBIA. Senado de la República. Proyecto de acto legislativo 11 de 2016 Senado. Por el cual se incluye el artículo 11-A dentro del Capítulo I del Título II de la Constitución Política de Colombia. [En línea]. [10 de abril de 2018]. Disponible en: [http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar\\_documento?p\\_tipo=03&p\\_numero=11&p\\_consec=44064](http://www.imprenta.gov.co/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=03&p_numero=11&p_consec=44064)

COLOMBIA. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Concepto unificado 11. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: [https://www.notinet.com.co/administrativo/servicios\\_publicos/Desarrollo%20de%20los%20planes%20de%20agua](https://www.notinet.com.co/administrativo/servicios_publicos/Desarrollo%20de%20los%20planes%20de%20agua)

COLOMBIA. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Nuestra Entidad. [En línea]. [15 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.superservicios.gov.co/Institucional/Nuestra-Entidad>

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH. Informe anual 2015. Capítulo VI-A. Acceso al agua en las Américas, una aproximación al derecho humano al agua en el sistema interamericano. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-agua-ES.pdf>

CORTÉS, Jordi. El Agua en el Mundo: Cooperación y Conflicto. [En línea]. [12 de agosto de 2017] Disponible en:

CUADROS, Camilo. Acercamiento al derecho fundamental al mínimo vital del agua potable y su prestación como servicio público domiciliario en Colombia. Santiago de Cali, 2004, 108 p. Trabajo presentado en modalidad de monografía (como requisito para optar al título de abogado). Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Facultad de humanidades y ciencias sociales. Departamento de ciencia jurídica. Carrera de Derecho. <http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/esp/itinerarios/agua/agua.htm>

DÁVILA, Santiago. El agua como un derecho humano. Bogotá, 2015, p 13. (Especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales). Universidad Militar Nueva Granada, facultad de Derecho. El texto en cursiva es decisión del autor de la presente tesis, para resaltar que corresponde al art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

DE ALBUQUERQUE, Carolina. Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el



derecho al desarrollo. Informe presentado como experta independiente sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento. Acta Comisión de Derechos Humanos 15/31. Naciones Unidas. 2010.

DE ALBURQUERQUE, Carolina. Derechos hacia el final. Buenas prácticas en la realización de los derechos al agua y al saneamiento. Lisboa: Ongawua, Ingeniería para el desarrollo humano, 2012. p. 28.

DINERO. Infraestructura. Gobierno invierte más en agua y saneamiento. En: Revista Dinero. (mar-2013). p.1.

FAYANAS, Edmundo. El escandaloso negocio del agua embotellada. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://www.nuevatribuna.es/articulo/economia/escandaloso-negocio-agua-embotellada/20171227165446146742.html>

FERNÁNDEZ, María Ángeles. El negocio del agua embotellada. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: <http://www.desplazados.org/wp-content/uploads/2013/02/El-negocio-del-agua-embotellada-In%C3%A9ditos-01-04-11.pdf>

FORERO, Gabriel. Venta de agua en botella mueve US\$10.237 millones. En: La República. Bogotá: (16 feb. 2016). p.1.

HERNÁNDEZ GALINDO, José Gregorio, Los servicios públicos en la Constitución Política, en: Los servicios públicos como instrumento de solidaridad y cohesión social del Estado. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. 2005, p. 60.

LA NACIÓN, Editorial. Agua, un recurso escaso y estratégico. En: La Nación, Buenos Aires. (3 de abril de 2008). p.1.

MORAL, Cristina. ¿Sabes cuántos litros de agua necesita una persona al día? [En línea]. [22 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://blog.ferrovial.com/es/2015/03/sabes-cuantos-litros-de-agua-necesita-una-persona-al-dia/>

NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. op. cit, p. 12.

NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. "El derecho al agua. Folleto Informativo No. 35". p.1. [En línea]. [13 de abril de 2018]. Disponible en: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet35sp.pdf>

NACIONES UNIDAS. Consejo de Seguridad. Resolución A/HRC/RES/18/1, 28 de septiembre de 2011. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en:

[http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=S](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/RES/18/1&Lang=S)

NACIONES UNIDAS. Decenio Internacional para la acción “El agua fuente de vida”. Subtema: Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/18/1, párrafo 1. [En línea]. [2 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human\\_right\\_to\\_water.shtml](http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml)

NACIONES UNIDAS. Objetivos de Desarrollo del Milenio. Informe de 2015. Nueva York. [En línea]. [3 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015\\_spanish.pdf](http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/2015/mdg-report-2015_spanish.pdf)

OEA. Asamblea General. Resolución 2349 “El agua, la salud, y los derechos humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria. Panamá, 5 de junio de 2007. Trigésimo séptimo período ordinario de sesiones. Documentos y Actas, págs. 357-360.

OEA. Asamblea General. Resolución 2760 “El derecho humano al agua potable y al saneamiento”. Cochabamba, Bolivia, 2012. p.268.

OEA. Carta de la Organización de los Estados Americanos (A-41). Art. 3. Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados\\_multilaterales\\_interamericanos\\_A-41\\_carta\\_OEA.asp](http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-41_carta_OEA.asp)

OJEDA, Eduardo y ARIAS, Raúl. Informe nacional sobre la gestión del agua en Colombia. Bogotá: Cepal, 2000. 77p.

ONU, Comité DESC, Observación General No. 15, Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, período de sesiones No. 29, 2002. El derecho al agua (artículos 11 y 12).

ONU, Resolución 64/292, El derecho humano al agua y el saneamiento. Aprobada por la Asamblea General el 28 de julio de 2010. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S)

ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Los derechos humanos y el acceso al agua potable y el saneamiento, Resolución A/HRC/15/L.14, del 24 de septiembre de 2010. párr. 5

- ONU. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer CEDAW. Nueva York, 1979, con entrada en vigor en 1981. Artículo 14, punto 2
- ONU. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Art. 28. [En línea]. [4 de febrero de 2018]. Disponible en: <http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>
- ONU. Convención sobre los derechos del niño. Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Art. 24, ítem C.
- ONU. Declaración universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948. [En línea]. [22 de octubre de 2017]. Disponible en: [http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1\\_Universales/B%E1sicos/1\\_Generales\\_DH/1\\_Declaracion\\_Universal\\_DH.pdf](http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_Universales/B%E1sicos/1_Generales_DH/1_Declaracion_Universal_DH.pdf)
- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Nueva York, 1966.
- PACHECO, Fredy. Defendamos el agua como “bien social”. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298272/defendamos-el-agua-como-%C3%A2%E2%82%AC%C5%93bien-social%C3%A2%E2%82%AC>
- PACHECO, Roxana. Capitalismo salvaje. [En línea]. [3 de septiembre de 2018]. Disponible en: <https://www.aporrea.org/tiburon/a23331.html>
- PACHECO-VEGA, Raúl. Agua embotellada en México: de la privatización del suministro a la mercantilización de los recursos hídricos. En: Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. XXII No. 63. (May-ago. de 2015). p.221-263
- PAQUIN, Marc. El derecho humano al agua potable y al saneamiento, capítulo 5 del Informe de Naciones Unidas “Agua y Empleo”. Ed: Unesco, París. 2016.
- PARTIDO VERDE. “Se vuelve a radicar Proyecto de Acto Legislativo por el Derecho Fundamental al Agua”. [En línea]. [11 de abril de 2018]. Disponible en: <https://www.claudia-lopez.com/se-vuelve-a-radica-proyecto-de-acto-legislativo-por-el-derecho-fundamental-al-agua/>
- PLAYGROUND. Estas son las cifras del turbio negocio del agua potable. [En línea]. [20 de agosto de 2018]. Disponible en: [https://www.playgroundmag.net/now/turbio-negocio-agua-potable\\_22660016.html](https://www.playgroundmag.net/now/turbio-negocio-agua-potable_22660016.html)

PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia. [En línea]. [25 de agosto de 2017]. Disponible en: <http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/ODM/undp-co-ODSColombiaVSWs-2016.pdf>

QUINTERO, Camilo. Análisis de la política pública de acceso al agua potable. Caso: Río de Oro, Cesar. Bogotá, 2010, 53 p. (Monografía de Grado Presentada como requisito para optar al título de Politólogo). Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Facultad de Ciencia Política y Gobierno.

REDACCIÓN. Empieza a regir nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado En: Revista Dinero. (junio-2016). p.1.

ROCHA, Johana, MARTÍNEZ, Nury y GONZÁLEZ, María. El agua escasea, las empresas transnacionales se enriquecen y el derecho lo permite. p.2. [En línea]. [21 de agosto de 2018]. Disponible en: <https://racionalidadltda.wordpress.com/2014/09/07/normas-icontec-para-trabajos-escritos-citas/>

SAFIULLINA, Aigul. Agua: un derecho humano al que no todos acceden. En: La Nación. (Buenos Aires). 2014. p.1.

SÁNCHEZ, Hugo. El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Bogotá. 2014. 138 p. Trabajo de grado (Presentado para optar al título de magíster en derecho administrativo). Universidad del Rosario, facultad de jurisprudencia.

SÁNCHEZ, Hugo. El derecho al agua y el mínimo vital en el marco del servicio público domiciliario de acueducto en Colombia. Bogotá. 2014. 138 p. Trabajo de grado (Presentado para optar al título de magíster en derecho administrativo). Universidad del Rosario, facultad de jurisprudencia.

SEGUNDA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. Plan de Acción. Santiago de Chile, Chile, abril 18-19, 1998. [En línea]. [5 de febrero de 2018]. Disponible en: [http://www.summit-americas.org/ii\\_summit/ii\\_summit\\_poa\\_sp.pdf](http://www.summit-americas.org/ii_summit/ii_summit_poa_sp.pdf)

SUÁREZ, Federico. El referendo constitucional para que el acceso al agua sea un derecho fundamental. En: Revista Derecho del Estado, n.º 24, (julio de 2010). p. 241

SUTORIUS, Mies y RODRÍGUEZ, Sonia. La fundamentalidad del derecho al agua en Colombia. En: Derecho del Estado. No. 35. (jul-dic. 2015). p. 243-265.

VIDAL, Carmen. El agua es el problema ambiental más grande del mundo. [En línea]. [23 de octubre de 2017]. Disponible en:

<http://www.ecoclimatico.com/archives/el-agua-es-el-problema-ambiental-mas-grande-del-mundo-517>

WORLD WATER COUNCIL. Dando al agua una voz audible. [En línea]. [17 de octubre de 2017]. Disponible en: <http://www.worldwatercouncil.org/es/quienes-somos/vision-mision-estrategia/>

YOUNES, Diego. La acción de tutela. En: Revista Derecho Público. Vol. 18. No. 31. (Ene. 2005).